

La teoría de los recursos de poder: una revisión crítica

Power Resources Theory: A Critical Reassessment

Inés Campillo y Jorge Sola

Palabras clave

Clase

- Desmercantilización
- Estado de bienestar
- Género
- Recursos de poder

Key words

Class

- De-commodification
- Welfare State
- Gender
- Power Resources

Resumen

La teoría de los recursos de poder (TRP) fue uno de los enfoques dominantes en el estudio del desarrollo de los Estados de bienestar de posguerra. Su idea básica es que los diferentes equilibrios de poder de clase explican las diversas formas adoptadas por estos. No obstante, cada vez más autores cuestionan su capacidad explicativa para dar cuenta del devenir de los Estados de bienestar postindustriales. Este artículo analiza los orígenes y contenidos de la TRP, revisa algunas de las principales críticas que ha recibido y sugiere una vía para la reformulación de este programa de investigación, mostrando que es un buen punto de partida para abordar las transformaciones recientes del Estado de bienestar y establecer un diálogo con otras áreas de investigación colindantes.

Abstract

Power resources theory (PRT) has been one of the dominant approaches in the study of the development of post-war welfare states. Its central idea is that different class power balances produce different forms of welfare states. However, scholars have increasingly questioned its explanatory ability to account for recent transformations in post-industrial welfare states. This article analyses the origins and contents of PRT, reviews three of the main critiques of the theory and suggests a path for the reconstruction of its research programme, arguing that it is a good starting-point for assessing recent changes in the welfare state and for promoting a dialogue with other neighbouring fields of research.

Cómo citar

Campillo, Inés y Sola, Jorge (2020). «La teoría de los recursos de poder: una revisión crítica». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 170: 19-34. (<http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.170.19>)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Inés Campillo: Universidad Complutense de Madrid | ines.campillo@ucm.es

Jorge Sola: Universidad Complutense de Madrid | jorgesola@cps.ucm.es

INTRODUCCIÓN

El Estado de bienestar (EB en adelante) ocupa un lugar central en las sociedades occidentales contemporáneas, aunque exhibe variaciones en las formas que adopta en cada una de ellas. ¿Por qué en algunos países está más desarrollado, sus políticas son más generosas o universalistas, y sus efectos redistributivos, más igualitarios? Estas preguntas han acaparado la atención de muchos investigadores en las últimas cuatro décadas, conformando una agenda de investigación que ha producido notables avances en nuestro conocimiento de los orígenes y el desarrollo del EB.

Entre las diversas perspectivas sobre la variabilidad de los diferentes EB, la más destacada probablemente sea la teoría de los recursos de poder (TRP en adelante). Este enfoque se propone explicar el desarrollo del EB y sus variaciones como resultado del equilibrio de poder entre clases sociales. Ya sea por la influencia que ejerció en la renovación del estudio del EB en los años ochenta, o porque ha sido el blanco de ataques y debates posteriores, la TRP ocupa un lugar central reconocido incluso por sus críticos (Pierson, 2000).

Junto al interés que ofrece este enfoque por su centralidad en un campo floreciente, hay otras dos razones que invitan a reflexionar sobre la TRP. La primera es que constituye un programa de investigación cuyo desarrollo ejemplifica cómo teoría social e investigación empírica pueden ir de la mano, combinando de un modo coherente el estudio de cuestiones sustantivas con el rigor metodológico. La segunda razón es que su atención al «iceberg de poder [que se esconde] bajo las políticas públicas» (Korpi, 1998) puede resultar inspiradora en un tiempo de crisis y desigualdad.

El objetivo de este artículo es ofrecer una revisión crítica de la TRP y de los debates que ha suscitado, así como discutir su interés para la investigación futura del EB y de

otros campos colindantes. La estructura del artículo es la siguiente. En el primer apartado se presentan las ideas clave de la TRP. En los tres siguientes se abordan sendos grupos de críticas relacionadas con su desatención a la desigualdad de género, las dinámicas institucionales y los límites estructurales, y se examina cómo han sido encajadas por este programa de investigación¹. Por último, se discute la vigencia de la TRP y se sugieren dos vías para su reconstrucción progresiva en futuras investigaciones

LA TEORÍA DE LOS RECURSOS DE PODER COMO PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

La TRP apareció en un contexto político y teórico particular: a finales de los años setenta, con la vista puesta en la experiencia socialdemócrata escandinava. Las obras fundacionales de la TRP (Korpi, 1978, 1983; Stephens, 1979; Esping-Andersen, 1985) se proponían explicar el éxito diferencial de los EB escandinavos y explorar las posibilidades de la política democrático-parlamentaria. Con ello intervenían en dos debates paralelos. En el plano *teórico*, la TRP respondía a las dos visiones dominantes del Estado: el pluralismo y el marxismo «ortodoxo». La TRP rechazaba tanto que el poder estatal tradujera las presiones de una pluralidad de actores con similar influencia como que fuera un simple aparato para proteger los intereses de los capitalistas. Por el contrario, el Estado y sus

¹ Estas críticas no son las únicas que ha recibido la TRP. Sin ánimo de ser exhaustivos, pueden mencionarse los trabajos que enfatizan, por encima del conflicto de clase, el apoyo de los empresarios (Swenson, 2002) y la centralidad de la inversión en capital humano (Estevez-Abe *et al.*, 2001) en el desarrollo del EB, o la literatura que señala la relevancia de la competencia partidista y la creciente volatilidad electoral (Anderson y Beramendi, 2012; Häusermann *et al.*, 2013). Por razones de espacio, este artículo se centra en estos tres grupos de críticas a la TRP (que constituyen, además, enfoques alternativos bastante heterogéneos).

políticas eran la cristalización de la «lucha democrática de clases» (Korpi, 1983): es decir, eran sensibles a la distribución variable del poder entre clases, expresada fundamentalmente por la fuerza del movimiento obrero. El correlato *político* era el énfasis en las posibilidades de cambio social que ofrecía la política democrática bajo el capitalismo, ilustrados por los avances logrados por la socialdemocracia escandinava, que llegó a presentarse como una experiencia de «transición al socialismo» (Stephens, 1979). Este contexto es clave, pero el éxito de la TRP ha consistido precisamente en conservar su rendimiento explicativo al ampliar el universo geográfico y temporal de aplicación.

En el plano estrictamente explicativo, la TRP enfatizaba los factores políticos, en oposición a las visiones funcionalistas dominantes. Estos enfoques explicaban el desarrollo del EB por su carácter funcional a las sociedades industriales o a la reproducción del capitalismo: para los autores pluralistas asociados a la «lógica del industrialismo», el EB respondía básicamente al «crecimiento económico y sus efectos demográficos y burocráticos» (Wilensky, 1975: xiii), independientemente del signo político de los gobiernos, mientras que para los autores ligados al «marxismo estructuralista», el EB venía a asegurar la estabilización y legitimación a largo plazo del capitalismo (O'Connor, 1973). Aunque cierto grado de desarrollo socioeconómico fuera una condición necesaria para la aparición de los EB, no *explicaba* las diferencias cualitativas en su evolución posterior.

El núcleo de la TRP puede resumirse así: la distribución de los recursos de poder entre los actores de clase es el motor del desarrollo de los EB y la explicación de sus variaciones. En particular, cuanto mayores sean los recursos de poder de la clase trabajadora, más generoso e igualitario será el EB. La clave no reside solo en la relevancia del conflicto de clase, sino en el reconocimiento de que la distribución de poder entre clases *varía* de

unas sociedades a otras, en oposición a muchos de los enfoques pluralistas y marxistas que «asumían que [era] estable aunque discreparan en si era relativamente igualitaria o extremadamente desigual» (Korpi, 1998: vii).

La innovación de la TRP consistió no solo en proponer una nueva explicación del desarrollo del EB, sino también en reconceptualizar este fenómeno; no solo ofreció un *explanans* alternativo, sino que revisó el propio *explanandum*. El *explanans* era el equilibrio de los «recursos de poder de clase», concebidos como «atributos que proporcionan a los actores la capacidad de sancionar o premiar a otros actores» (Korpi, 1983: 23). Mientras que los capitalistas disponen, en virtud de la propiedad y del control de capital, de un enorme poder en los conflictos distributivos, los trabajadores cuentan únicamente con su fuerza de trabajo para negociar en el mercado laboral. El único modo de incrementar sus recursos de poder es la organización colectiva por medio de partidos y sindicatos².

Por el lado de los partidos, las principales variables propuestas para operacionalizar los recursos de poder fueron el porcentaje de votos, el número de escaños y puestos en el gobierno ocupados por los partidos de izquierda y, sobre todo, los años de gobiernos de izquierdas. El análisis histórico-comparado también reveló la importancia de los legados históricos y las alianzas de los partidos de clase trabajadora con otros actores sociales. En relación a los partidos de derechas, pronto se estableció una distinción entre liberales y democristianos, por su contribución distintiva a la construcción del EB.

Por el lado de los sindicatos, las principales variables escogidas fueron su estructura organizativa (el grado de unidad/fragmentación) y la tasa de afiliación sindical (Korpi, 1983). La actividad huelguística se descartó

² El poder de los capitalistas, claro está, también consiste en su capacidad para la acción colectiva.

porque descendía a medida que el movimiento obrero, al incrementar e institucionalizar su poder, era capaz de desplazar y ampliar el conflicto distributivo desde la esfera laboral a la arena política (Korpi y Shalev, 1980). Esta «politización» del conflicto distributivo beneficiaba a los trabajadores, pues la lógica político-democrática («una persona, un voto») era más favorable que la lógica de mercado, donde el capital llevaba las de ganar. Como rezaba un lema laborista británico: *The rich man has his money, the poor man has his politics* (Hirsch, 1978: 269). El desarrollo del EB podía verse como la expresión de la «política frente al mercado» (Esping-Andersen, 1985).

En este sentido, la TRP también representó un doble giro respecto a la conceptualización del *explanandum*: el desarrollo del EB. La literatura precedente había atendido básicamente a su dimensión cuantitativa, expresada en el nivel de gasto social como porcentaje del PIB (Wilensky, 1975), una opción favorecida por la escasa disponibilidad de otro tipo de datos. Los partidarios de la TRP, por el contrario, defendieron una perspectiva cualitativa: lo decisivo no era *cuánto* gastaba el EB, sino *cómo* y con *qué* efectos; su cobertura e impacto redistributivo para conseguir una mayor igualdad y garantizar la «ciudadanía social» a toda la población³. Como resumen Huber y Stephens: «[...] la lucha en torno a los Estados de bienestar es una lucha por la distribución, de modo que el poder organizativo de quienes se benefician de la redistribución, las clases trabajadoras y medio-bajas, es clave» (2001: 17).

A la hora de medir el impacto del EB, el criterio que más éxito cosechó fue el de «desmercantilización», que hace referencia al «grado en que [los derechos sociales] per-

miten a la gente llevar a cabo sus estándares de vida independientemente del mercado [y] refuerzan al trabajador [frente a] la autoridad absoluta del empresario»⁴ (Esping-Andersen, 1990: 3-22). El estudio de los EB debía atender, pues, al grado en que las políticas sociales contrarrestaban la lógica distributiva del mercado y reequilibraban las relaciones sociales de un modo favorable a las clases trabajadoras. Esping-Andersen operacionalizó la desmercantilización atendiendo a la generosidad de, y el acceso a, varias prestaciones (enfermedad, desempleo y pensiones), aunque el concepto se presta a operacionalizaciones alternativas.

El segundo giro de la TRP consistió en ampliar el foco para estudiar no solo el Estado, sino los *regímenes* de bienestar: los «ordenamientos cualitativamente diferentes entre Estado, mercado y familia» en la provisión de bienestar (Esping-Andersen, 1990: 26). Inspirándose en la obra de Titmuss (1981), Esping-Andersen construyó su famosa tipología, que distingue entre regímenes de bienestar en función de su grado de desmercantilización: de menor a mayor, los regímenes liberales o anglosajones, los conservadores o corporativistas, y los socialdemócratas o nórdicos. Las políticas sociales de cada uno de ellos estarían guiadas por distintos principios (la falta de recursos, el estatus de empleo o la ciudadanía) y tendrían diferentes efectos estratificadores. Esta tipología, hoy comúnmente aceptada, se amplió más tarde para dar cabida a otros regímenes, como los de las antípodas, el sur de Europa o los países del Este.

Junto a los efectos redistributivos del EB, la TRP ha señalado sus efectos de retroalimentación político-ideológica. Por un lado, la desmercantilización atenúa la división y la competencia en el mercado entre los traba-

³ Para desarrollar empíricamente este enfoque teórico, Korpi y Esping-Andersen impulsaron el *Social Citizenship Indicator Program* (SCIP), y Lyle Scruggs, *The Comparative Welfare Entitlements Dataset* (CWED).

⁴ El término está inspirado en la obra de Polanyi (1989), y, según Offe (1996), se le ocurrió a él en una conversación con Esping-Andersen.

jadores, favoreciendo su unidad y organización para la acción colectiva (Esping-Andersen, 1985). Por otro lado, las políticas sociales asociadas al ideal de ciudadanía promueven una «economía moral» de normas y principios igualitarios (Svallfors, 2006). En ese sentido, la continuidad a medio plazo de gobiernos de izquierda contribuía a «cambiar las preferencias de los actores, [su] universo y [sus] expectativas» (Huber y Stephens, 2001: 28), desplazando los límites de lo percibido como posible y deseable en el debate político. Una vez aplicadas, las políticas creaban un escenario ideológico-institucional más difícil de revertir y que podía sobrevivir a gobiernos de distinto color.

Existe un buen número de investigaciones inspiradas por la TRP que respaldan su principal tesis de que la distribución de poder de clase explica el desarrollo del EB. En la estela de los citados trabajos de sus fundadores, surgieron otros enfocados en políticas sociales más específicas, como las pensiones (Myles, 1984; Palme, 1990), el seguro de enfermedad (Kangas, 1991) o las ayudas familiares (Wennemo, 1994), pero también en aspectos del mercado laboral, como los niveles de desempleo (Korpi, 1991), la calidad del trabajo (Gallie, 2007) o la distribución funcional de la renta (Kristal, 2010). La TRP se ha convertido en uno de los enfoques más influyentes para dar cuenta del desarrollo del EB, pero también ha sido objeto de muchas críticas. La ambiciosa obra de Huber y Stephens (2001) —que combina análisis estadístico e histórico-comparado para un lapso temporal de medio siglo— es ilustrativa en este sentido: su conclusión es que los recursos de poder fueron el factor decisivo en el desarrollo del EB de posguerra, pero han dejado de serlo en las últimas tres décadas, un resultado que pone en cuestión la vigencia de la TPR y sobre el que volveremos más adelante. Antes de emitir un veredicto, veamos algunos de los cargos que se le imputan.

LA CRÍTICA FEMINISTA: LOS RECURSOS DE PODER DE LAS MUJERES

El primer grupo de críticas provino del feminismo. Se acusaba a la TRP de ignorar el género y basarse en categorías pretendidamente neutras (trabajador, ciudadanía social o familia) que, en realidad, respondían a la experiencia masculina y se asentaban en la división sexual del trabajo. Sin embargo, la centralidad que la TRP concedía al poder o la estratificación tendió un puente para el intercambio con las investigadoras feministas en torno a la ciudadanía de las mujeres (Sainsbury, 1994). Estas revelaron los sesgos de género subyacentes a las categorías clave de la TRP (mercado-Estado, estratificación o ciudadanía social), y ofrecieron propuestas para enmendarlos⁵, con vistas a elaborar una teoría sobre el poder y la desigualdad bajo los regímenes de bienestar que incluyera a hombres y mujeres (Orloff, 1993; O'Connor, 1993).

Primero, las críticas feministas se dirigieron a la noción de «régimen de bienestar». Pese a referirse a la interacción entre Estado, mercado y familia en la provisión de bienestar, la atención empírica de la TPR se centraba en la relación entre los dos primeros (expresada, por ejemplo, en los programas clásicos de transferencia de renta, como pensiones, enfermedad y desempleo) y desatendía a la tercera. De este modo, no solo se ignoraba el papel crucial de la familia (y las mujeres) en la provisión de bienestar, sino que se ocultaba la desigualdad de género en el seno de la familia y en el mercado laboral. Por esa razón, estas investigadoras señalaron que debían examinarse cómo los regímenes de bienestar reequilibraban no solo la posición de los trabajadores en el mercado, sino también la de las mujeres en las familias

⁵ Otras investigadoras siguieron otro camino y formularon propuestas independientes de la TRP que se centraban principalmente en las desigualdades de género (Lewis, 1992; Sainsbury, 1994).

—el grado en que reducían la división sexual del trabajo dentro y fuera de la familia— a fin de evaluar mejor la «ciudadanía» promovida por cada uno de ellos.

Esto exigía, por un lado, atender a la ideología familiar —o «la política de interpretación de necesidades» (Fraser, 1989)— que cada régimen ponía en juego: esto es, en qué medida reproducía un modelo de familia de varón sustentador y unos derechos de bienestar diferenciados para hombres y mujeres (Lewis, 1992; Sainsbury, 1994). Y por otro, ampliar el concepto de estratificación social que subyacía a la TRP para incorporar la desigualdad de género. El análisis de los efectos estratificadores de cada régimen no podía restringirse a las dinámicas de mercado y las divisiones de clase, sino que debía prestar atención a las dinámicas familiares y las divisiones de género, así como a la interacción entre unas y otras. Los EB podían atenuar la desigualdad de género, pero también reproducirla: era el caso, por ejemplo, de los regímenes corporativistas. Al ligar los derechos sociales al estatus laboral, mucho más precario en el caso de las mujeres (por no tener empleo, o por tenerlo temporal o a tiempo parcial), les impedían disfrutar de los programas de bienestar por derecho propio, reforzando su dependencia económica y menoscabando su ciudadanía.

La crítica feminista también se dirigió a la idea de desmercantilización como base de la ciudadanía social. Esta noción presupone una «mercantilización» previa: en otras palabras, una experiencia vital que era específica de los varones —la participación en el mercado laboral a tiempo completo durante la mayor parte de la vida—, y que representaba la vía de acceso a muchos derechos sociales. Pero esa no era la experiencia de la mayor parte de las mujeres, que vivían (y, en parte, siguen viviendo, aunque sea intermitentemente) fuera del mercado laboral. De hecho, la mercantilización de las mujeres podía tener un aspecto emancipatorio respecto a su subordinación en el hogar. Puesto que el criterio

de desmercantilización no captaba la complejidad de la ciudadanía social de las mujeres, algunas autoras propusieron complementarlo con dos nuevas dimensiones que capturarán el grado en que los regímenes de bienestar promovían el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, y el grado en el que promovían la capacidad de quienes realizan las labores de cuidado (mayoritariamente, mujeres) para formar un hogar autónomo (Orloff, 1993). Los tres criterios captarían el grado en que cada régimen promueve la autonomía personal, no solo respecto al mercado o el empresario, sino también respecto a la familia y al cónyuge (O'Connor, 1993).

Pero las propuestas feministas para reevaluar la TRP con dimensión de género se dirigieron también al *explanans*: para entender el carácter de los diversos regímenes de bienestar, había que añadir los recursos de poder de las mujeres a los de la clase. Las organizaciones de clase no eran las únicas relevantes para lograr un EB «favorable a las mujeres» (Hernes, 1987); por el contrario, había que prestar atención al «poder desde abajo» (Siim, 1988) de otras organizaciones, como movimientos sociales o grupos de interés feministas. Estos recursos de poder de las mujeres se despliegan en la arena discursiva y en la movilización política, a través de las alianzas del movimiento feminista con los partidos de izquierdas (Orloff, 1993). De hecho, varios estudios empíricos constataron que el nivel de protección de las mujeres trabajadoras y de las madres solas (Hobson y Lindholm, 1997), y el nivel de desarrollo de las prestaciones monetarias a las familias (Wennemo, 1992) y de los sistemas de servicios de atención infantil (Gustafsson, 1994; Mahon, 2006; Naumann, 2012) dependen en gran parte de la fortaleza y estrategia del movimiento feminista en alianza con los partidos de izquierdas⁶.

⁶ La mayoría de estos estudios se han centrado en el periodo de posguerra hasta los años noventa, pero ape-

Estas críticas feministas fueron asumidas en gran medida por los defensores de la TRP. Cabe destacar el caso de Esping-Andersen (2000) por haber sido el blanco de la mayor parte de las críticas feministas⁷: además de enfatizar la relevancia de la economía familiar, llamó la atención sobre el error que se comete actualmente al diseñar políticas públicas para un modelo tradicional de familia que está en declive. Asimismo, introdujo, en línea con las propuestas mencionadas, un criterio complementario para analizar los regímenes de bienestar: la «desfamiliarización»⁸, que hacía referencia a «aquellas políticas que reducen la dependencia individual de la familia [y] maximizan la disponibilidad de los recursos económicos por parte del individuo independientemente de las reciprocidades familiares o conyugales» (2000: 66). El análisis del gasto público en servicios familiares, o de la cobertura de los servicios públicos de educación infantil y asistencia domiciliaria a los ancianos, mostraba que los regímenes de bienestar socialdemócratas se distinguían de los liberales y corporativistas, mucho menos desfamiliarizadores (si bien en los segundos estos servicios recaen más en la familia, y en los primeros, en el mercado).

Korpi (2000) también recogió el guante y se ha concentrado desde entonces en la estratificación, estudiando cómo los diversos EB promueven tanto la igualdad o desigualdad de clase como la de género, entendida esta no solo en términos materiales, sino también de agencia. Así, analizando diferentes políticas (programas de seguridad social, política fiscal y servicios sociales), ha distinguido tres modelos de EB según qué mode-

lo familiar apoyen: el tradicional, la familia de dos sustentadores/dos cuidadores, y el orientado al mercado. Huber y Stephens (2000), por su parte, han enfatizado la relevancia de los servicios públicos (con un empleo de calidad) para activar un círculo virtuoso que facilita el acceso al empleo a las mujeres e incrementa su poder político: la participación laboral, las organizaciones de mujeres y su influencia en los partidos se convierten, a su vez, en un factor clave en el desarrollo del EB.

En resumen, la TRP ha sufrido un proceso —inacabado (Orloff, 2009)— de «generización» que ha ampliado sus intereses temáticos y líneas de investigación. La proposición básica que está en el núcleo de la reformulación feminista de este programa de investigación es: cuanto mayores sean los recursos de poder de las mujeres, mayor será la autonomía personal que les proporcione el régimen de bienestar (y viceversa).

LA CRÍTICA INSTITUCIONALISTA: LAS INERCIAS HISTÓRICAS

La hegemonía de la TRP fue socavada en los años noventa por el institucionalismo. Esta etiqueta agrupaba enfoques diversos con un presupuesto común: las instituciones estatales importan⁹. Para Theda Skocpol, máximo exponente del esfuerzo teórico por «traer al Estado de vuelta» (Evans *et al.*, 1986), la TRP concebiría la política «en modos socialmente deterministas [que presumen] que la acción gubernamental es la expresión de condiciones sociales y responde directamente a las demandas sociales» (Skocpol, 1995: 40). Frente a este determinismo, la autora propo-

nas han abordado el periodo siguiente, probablemente por el predominio posterior del institucionalismo.

⁷ Irónicamente, esa atención al género y la familia se vio acompañada por su progresivo distanciamiento de la TRP.

⁸ Término tomado de Lister (1994) y Saraceno (1997) que por el camino, según Orloff (2009), ha perdido parte de su filón crítico.

⁹ El nuevo institucionalismo es, con todo, algo más amplio: de los tres tipos (histórico, de elección racional y sociológico) que distinguen Hall y Taylor (1996), nos referimos básicamente al primero. Por otro lado, no analizamos algunos trabajos clásicos, como el de Rothstein (1998), que también pueden catalogarse como «institucionalistas».

nía un «análisis centrado en la organización estatal», cuyo argumento central es que las instituciones gubernamentales decantadas históricamente, las políticas públicas establecidas, el personal burocrático-estatal y el sistema político-electoral no son un mero escenario del conflicto o un instrumento en manos de los grupos sociales enfrentados, sino que constituyen fuerzas relativamente independientes del conflicto de clase.

Aunque esta idea básica se ha concretado en distintas líneas de análisis¹⁰, la perspectiva teórica dominante hasta muy recientemente ha sido la llamada «nueva política» del EB (Ferrera y Hemerijck, 2003; Pierson, 2001, 1996; Bonoli, 2006; Green-Pedersen y Haverland, 2002). Según este enfoque, la TRP y sus presupuestos de «vieja política» serían válidos para dar cuenta de la expansión de los EB de posguerra, pero no para explicar la dinámica de cambio en los EB postindustriales. La clave de esa obsolescencia sería la influencia que ejercen los arreglos institucionales preexistentes sobre el conflicto político y la continuidad de los programas de bienestar: esto es, los efectos de retroalimentación política (*policy feedback*) que ponen en juego los EB ya consolidados.

Este argumento ha tenido dos desarrollos básicos. En primer lugar, la propia consolidación institucional y la legitimidad de los EB de posguerra habría alterado profundamente la dinámica política. Mientras que el conflicto de la «vieja política» giraba principalmente en torno a la expansión de derechos y el incremento del gasto social, la nueva política ha de hacer frente a un contexto de «austeridad permanente» y lidiar con los recortes de los programas de bienestar. Además, mientras la vieja política estaba dominada por el enfrentamiento de clase entre la izquierda

«prowelfarista» y la derecha «antiwelfarista», la consolidación de los programas de bienestar habría forjado nuevas coaliciones de beneficiarios en su apoyo, que desbordarían las organizaciones tradicionales de clase. Dicho de otro modo, la defensa del EB ya no sería cosa solo de partidos de izquierda y sindicatos, sino que incluiría a nuevos actores nacidos al abrigo de la consolidación de sus programas — beneficiarios y empleados públicos— y a todo tipo de votantes. Dada la gran popularidad del EB, todo partido tiene incentivos electorales para introducir ajustes parciales en lugar de desmontarlo, de modo que la dinámica política es más consensual y gradual que en el pasado.

En segundo lugar, se ha insistido en la importancia de las inercias institucionales, particularmente en la dependencia de la trayectoria histórica (*path dependence*). El argumento básico es que, una vez creados, los programas del EB son una parte central de las instituciones y lógicas del Estado, representan el *statu quo*, de modo que son más difíciles de revertir que de preservar, una dinámica que se ve reforzada por la existencia de «puntos de veto» político-constitucionales (Immergut, 1990). Por esa razón, los institucionalistas han enfatizado la continuidad del EB y descartado la posibilidad de grandes cambios, aun admitiendo que existe un proceso de reestructuración en curso de los EB —en tres direcciones: remercantilización, contención de costes y «recalibración»— para adaptarlos al nuevo contexto de «austeridad permanente» (Pierson, 2001).

En realidad, la formulación clásica de la TRP no era ajena a la importancia de los legados institucionales y sus defensores se han mostrado receptivos a las contribuciones institucionalistas¹¹. Pero su respuesta ha

¹⁰ Por un lado, de las instituciones políticas, que fijan las reglas del juego; por el otro, las instituciones del EB, que aseguran la provisión de bienestar (Starke, 2008).

¹¹ Algunos, como Esping-Andersen, hasta el punto de aceptar que «los actuales regímenes de bienestar tienden a ser cautivos de su propia lógica institucional» (2000: 12) y abandonar, en cierto modo, la TRP.

introducido tres importantes matices, relativos al *explanandum* (la evolución del EB), al grado en el que las instituciones son determinantes y al modo de integrar el poder en su estudio.

Primero, el retrato predominante de la relativa estabilidad de los EB suele incurrir en el viejo error de tomar como indicador de la variable dependiente el nivel del gasto social como porcentaje del PIB (Korpi y Palme, 2003). A la crítica fundacional de la TRP hay que añadir que, si bien este indicador apenas ha variado en las últimas décadas, la realidad social sobre la que actúan las políticas del EB sí que lo ha hecho: el espectacular aumento del desempleo, los cambios en el modelo familiar y el envejecimiento de la población a partir de los años ochenta hacen que el mismo nivel de gasto no satisfaga de igual modo las necesidades sociales ni mantenga los niveles conseguidos de igualdad, de modo que el bienestar que se logra con ese gasto es notablemente menor (véase Clayton y Pontusson, 1998). Segundo, Huber y Stephens (2001) han incorporado explícitamente una versión *débil* de las inercias y legados institucionales, ampliando el foco con cuatro mecanismos causales que favorecen la continuidad: el efecto trinchete (*ratchet*), la limitación estructural, los legados de régimen y la hegemonía ideológica; pero han rechazado una versión *fuerte* según la cual los hitos clave en el desarrollo de un EB determinan su futura trayectoria. Tercero, ese catálogo de mecanismos causales apunta a un aspecto que Korpi (2001, 1989) ha teorizado más sistemáticamente: las instituciones no son escenarios o instrumentos «independientes» de los conflictos de poder entre grupos sociales, sino que son el resultado de conflictos pasados y contribuyen a estructurar los conflictos futuros, de modo que están atravesadas por las divisiones de poder privilegiadas por la TRP. El fructífero diálogo abierto entre ambos enfoques puede enriquecerse también con la crítica inspirada en un tercero: el marxismo.

LA CRÍTICA MARXISTA: LOS LÍMITES ESTRUCTURALES

El tercer grupo de críticas acusa a la TRP de magnificar el poder explicativo de la política democrática y minimizar las constricciones estructurales. Si la TRP nació en respuesta a las visiones funcional-estructuralistas del EB, el peligro opuesto consiste en dar la espalda a los límites estructurales que constriñen su desarrollo. En un sentido trivial, la TRP debería considerar que en una economía de mercado «el control sobre la elección de las políticas [no] garantiza el control sobre [sus] resultados» (Scharpf, 1991: 361), que dependen en gran medida de la dinámica económica. Pero la crítica ha seguido dos caminos más sofisticados, basados en los *sesgos de clase* del Estado y su *dependencia estructural* del capital.

En cuanto al primero, diversos autores marxistas han argumentado que el Estado no debe concebirse como un escenario «neutral» del conflicto de clase, puesto que posee determinadas características estructurales que favorecen *sistemáticamente* la reproducción del capitalismo (Poulantzas, 1982). Pese al aroma funcionalista de esta idea, el debate que se produjo en los años setenta (Miliband, 1980; Offe, 1974; Therborn, 1978) señaló diversos mecanismos explicativos —desde el reclutamiento y las relaciones sociales de los funcionarios estatales a las inercias de las lógicas administrativas— que cuestionaban el optimismo de la TRP. Sin embargo, estos debates cayeron en el olvido con el declive académico del marxismo y la TRP no estableció un diálogo con ellos. Un posible intercambio en esa dirección podría haber analizado la variabilidad histórico-geográfica de dichos sesgos de clase y la interacción entre las constricciones del Estado y los actores de clase (es decir, hasta qué punto partidos y sindicatos podían erosionarlas o verse atrapados por ellas), lo que entroncaría también con los debates institucionalistas.

El segundo camino pasaba por la «dependencia estructural» del Estado respecto al capital: independientemente de quién esté en el gobierno o lo que haga la clase dominante, los administradores del Estado (políticos y funcionarios) están *estructuralmente* interesados en mantener un buen «clima de negocios» para favorecer la inversión empresarial y el consiguiente crecimiento económico, lo que en última instancia ha de asegurar la viabilidad económica y la legitimidad política del propio Estado (Block, 1977). Por esa razón, las políticas estatales se moverán dentro de ciertos límites que permitan promover la inversión: en caso contrario, se corre el riesgo de una huida de capitales y la consiguiente crisis. Por supuesto, dentro de esos límites hay un margen de variación, determinado fundamentalmente por la presión del conflicto de clase. Es decir, el Estado debe ponderar tres exigencias contrapuestas: promover la inversión, perseguir sus propios intereses y satisfacer las demandas sociales. Todas estas aportaciones apuntaban, de un modo u otro, a las fricciones que pueden observarse entre el desarrollo del EB y las presiones del capitalismo, resumidas magníficamente por Offe: «[...] mientras que el capitalismo *no* puede coexistir con el EB, tampoco puede existir *sin él*» (1984: 153).

La TRP ha sido más receptiva a esta segunda crítica. Huber y Stephens admiten que, por esa razón, «los intereses capitalistas tienen una ventaja sistemática [...] agravada por la globalización» (2001: 13). Sin embargo, la dependencia respecto al capital puede ser más apremiante en algunas políticas (la presión fiscal) que en otras (la política social), y en último término es una cuestión de grado, cuyo estudio tropieza con un escollo metodológico: es difícil establecer dónde se sitúan los límites estructurales y saber si una política choca con ellos. Offe (1974) sostenía que tales límites solo pueden descubrirse empíricamente cuando el conflicto social los desafía abiertamente, pero ni si-

quiera entonces está del todo claro (véanse, por ejemplo, las causas de la derrota del plan Meidner sueco en Pontusson, 1992).

En todo caso, que existan límites (o presiones) estructurales no elimina por completo las variaciones políticas, como muestra el caso de la globalización. Como indican Clayton y Pontusson, «la cuestión de si la movilidad del capital ejerce presión a la baja sobre los Estados del bienestar no debería confundirse con la cuestión de si la movilidad del capital produce convergencia entre los Estados del bienestar» (1998: 99). Dicho de otro modo: «[...] la ausencia de convergencia no demuestra la ausencia de efecto [de la globalización]» (Schwartz, 2001: 23). Así pues, resumiendo, si bien los límites estructurales son relevantes para el desarrollo del EB, no terminan por completo con la variabilidad que busca explicar la TRP, pero este programa de investigación haría mal en perderlos de vista, sobre todo a la luz de la crisis actual (véase, por ejemplo, Streeck, 2014).

¿UNA RECONSTRUCCIÓN PROGRESIVA DE LA TRP?

Si bien el esfuerzo teórico de la TRP ha permitido ampliar los fenómenos que puede explicar (las variaciones del EB en términos de género) y la complejidad de sus explicaciones (integrando los aspectos institucionales y estructurales), los resultados empíricos no parecen haber acompañado del todo: para muchos autores, su rendimiento explicativo parece haberse reducido, hasta casi desaparecer, a la hora de dar cuenta de la evolución del EB a partir de los años ochenta. Los propios Huber y Stephens parecen admitir esta conclusión, que de algún modo predomina en la literatura reciente. Entre sus partidarios de primera hora, solo Korpi se ha mantenido firme en su defensa.

¿Deberíamos rechazar la TRP por esta razón (o confinarla a la explicación del pasado)? En nuestra opinión, esta conclusión se-

ría precipitada y perniciosa. Para explicarlo puede ser útil aludir a las ideas de Lakatos (1978) sobre el avance del conocimiento científico. Según el filósofo húngaro, la ciencia no funciona desechando una teoría tan pronto como surge evidencia contraria, sino más bien intentando acomodar estas anomalías dentro de un programa de investigación más amplio. Un programa de investigación consta de un «núcleo» teórico y de un «cinturón protector» de «hipótesis auxiliares» que lo rodea. Cuando aparecen anomalías que no encajan en él, existe margen para modificar algunas partes de ese cinturón a fin de preservar el núcleo teórico. El éxito de un programa de investigación depende de que su reconstrucción sea «progresiva» y ofrezca una «heurística positiva»: es decir, que sea capaz de explicar nuevos fenómenos, en lugar de esquivar la evidencia contraria con parches que conducen a un callejón sin salida.

La TRP puede entenderse como un programa de investigación: contiene un núcleo teórico (que el desarrollo del EB se explica por la articulación política de las divisiones de clase y género) y un cinturón protector de teorías auxiliares que especifican, entre otras cosas, cómo se produce esa articulación política (por ejemplo, desplazando parcialmente el conflicto distributivo, a través de partidos y sindicatos, del mercado a la arena política del Estado-nación). Desechar la TRP a tenor de las críticas justificadas que ha recibido sería precipitado y pernicioso porque no disponemos de un programa de investigación mejor sobre el desarrollo y la crisis del EB. La mayor parte de las alternativas institucionalistas parecen más bien explicaciones parciales o *ad hoc*, que aciertan al señalar ciertos factores relevantes, pero no son capaces de integrarlos en un programa de investigación consistente. La TRP, por el contrario, posee una saludable ambición teórica: se asienta en el «iceberg del poder» de la estructura social y conecta con tradiciones de investigación (marxista, feminista

o weberiana) y problemas sustantivos (la relación entre poder, clase/género y política) centrales en ciencias sociales.

Esa ambición teórica ha sido dirigida empíricamente de un modo fructífero: la TRP destaca por su esfuerzo metodológico para especificar y contrastar empíricamente sus hipótesis, por medio del estudio histórico-comparado o el análisis estadístico. Como se ha mostrado, el diálogo que ha logrado establecer con sus críticos ha resultado provechoso: la TRP se ha reformulado en términos de género, ha incorporado la mirada «vertical» a las instituciones y ha integrado la atención a los límites estructurales. Pero la aceptación por parte de algunos de sus partidarios de que es incapaz de explicar la evolución del EB a partir de los años ochenta exige un replanteamiento más profundo. ¿Cómo podría llevarse a cabo una «reconstrucción progresiva» de la TRP?

En nuestra opinión, esta reconstrucción podría tomar dos direcciones —«hacia arriba» y «hacia abajo»— que, conservando el núcleo de la TRP, modifiquen algunas de sus hipótesis auxiliares. La idea subyacente es que los (des)equilibrios de poder basados en las divisiones sociales de clase y género siguen siendo centrales para explicar las políticas sociales y de empleo, pero que su articulación política ha experimentado enormes cambios en cuanto a las esferas en las que tiene lugar el conflicto distributivo y a las armas organizativas de que disponen las clases populares.

Primero, la TRP debería mirar «hacia arriba»: los procesos de financiarización y globalización no deben entenderse como simples factores exógenos que reducen el margen de maniobra de los actores políticos, sino como procesos resultado de estrategias y conflictos que estructuran la «lucha democrática de clases» de un modo desigual para los intereses de los diferentes grupos sociales (Gowan, 2000; Abdelal, 2007). Es decir, la TRP debería incluir en su programa de inves-

tigación el estudio sistemático de estos procesos y sus efectos: ver de qué modo se han movilizado los recursos de poder a un nivel supranacional y los resultados que ha producido. De algún modo, estos dos procesos ponen en cuestión el logro, señalado anteriormente, de desplazar el conflicto distributivo del mercado a la esfera política (del Estado-nación), y representan el proceso contrario: una vuelta al mercado. La globalización ha facilitado la movilidad del capital y, por tanto, ha incrementado la «dependencia estructural» de un Estado-nación crecientemente desarmado. El resultado es el famoso trilema de Rodrick (2011) entre soberanía nacional, globalización y democracia (y la imposibilidad efectiva de casar las dos últimas). La financiarización no solo ha incrementado el peso de las finanzas en la economía, sino que ha desplazado el conflicto distributivo a una esfera particularmente opaca y desfavorable para la acción colectiva de las clases populares. Junto a estos dos procesos, también cabe señalar la construcción de la Unión Europea, cuya evolución en las últimas décadas refleja el ideal hayekiano de un mercado protegido de las presiones democráticas provenientes del Estado-nación (Streeck, 2014). Buena parte de la literatura sobre el EB ha dado por sentada la «austeridad permanente» como el trasfondo sobre el que se mueven las políticas públicas. La TRP nos proporciona una llave para abrir la «caja negra» de estos tres fenómenos (como expresión de equilibrios de poder) y conectarlos con la evolución de los regímenes de bienestar y empleo.

Segundo, la TRP debería mirar «hacia abajo»: la evolución de los partidos políticos (en especial, los socialdemócratas) plantea la cuestión de hasta qué punto siguen siendo recursos de poder en manos de la clase trabajadora. El ascenso del modelo de «partido cártel» (Katz y Mair, 1995) implica una convergencia de estas organizaciones, a resultas de su colusión con el Estado y en detrimento de los lazos que las anclaban a

la sociedad (Mair, 2013). El debilitamiento de los vínculos orgánicos entre partido y sociedad es especialmente relevante en el caso de los «partidos de clase»: junto al desplazamiento de su apoyo electoral hacia la clase media (Gingrich y Häusermann, 2015), la reducción de su base militante, el cambio en la composición de sus cuadros y dirigentes y su distanciamiento de los sindicatos (Moschonas, 2002) parecen haber contribuido a cortar esos lazos, con los consiguientes efectos en las políticas que se defienden y aplican. A pesar de que algunos partidarios de la TRP han enfatizado que «ha de haber organizaciones que articulen los intereses de clase [y] los partidos políticos desempeñan un papel mediador clave» (Huber y Stephens, 2001: 17-18), el estudio de estas organizaciones constituye una laguna para la TRP —que de algún modo daba por sentado el vínculo clase-partido—. Con todo, la TRP ofrece herramientas para abrir esta otra «caja negra» y estudiar de qué modo y en qué medida los partidos de izquierda siguen representando los intereses de la clase trabajadora¹², en conexión con los debates recientes sobre el Estado de bienestar, el declive del voto de clase, la política partidista (Häusermann *et al.*, 2013) o la dualización social (Emmegger *et al.*, 2012).

La consideración sistemática de estos dos grupos de procesos parece una vía prometedora para aprovechar el núcleo de la TRP con vistas a explicar las transformaciones en curso del EB y, más en general, de los regímenes de bienestar y empleo. La idea clave es que los (des)equilibrios de poder basados en la clase (y el género) siguen siendo centrales, pero que su articulación difiere sustancialmente de la que cono-

¹² De acuerdo con lo dicho anteriormente, el estudio de esta «caja negra» también debe considerar el género, y puede beneficiarse del camino abierto por las feministas al analizar la influencia de las mujeres en las organizaciones políticas (véase, por ejemplo, Morgan, 2013).

ció la «época dorada del capitalismo» de posguerra. Eso no implica que la relevancia de la clase haya desaparecido¹³, sino más bien lo contrario: la desarticulación organizativa de las clases populares y la rearticulación supranacional de las clases capitalistas parecen factores clave para explicar la evolución reciente del EB.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Este artículo ha ofrecido una revisión crítica de la TRP: tras presentar este programa de investigación y revisar tres grupos de críticas (feministas, institucionalistas y marxistas), hemos sugerido una doble vía para una futura reconstrucción progresiva de este programa de investigación basada en la reformulación de los recursos de poder en dos direcciones: la rearticulación supranacional (los procesos de globalización y financiarización) y la desarticulación organizativa (la mutación de los partidos políticos) del conflicto de clase. Esta propuesta tiene como objetivo conservar la capacidad heurística de la TRP para dar cuenta de la evolución reciente de los regímenes de bienestar y empleo, y parece prometedora en dos sentidos.

En lo que se refiere al estudio general del EB, sigue ofreciendo un buen punto de partida teórico y permite evitar el peligro del «empirismo abstracto» (es decir, el análisis de datos o la descripción de fenómenos sin un marco teórico que les dé sentido y valor). De hecho, así reformulada, la TRP parece más capaz que sus rivales de dar cuenta de la evolución del EB durante la Gran Recesión, devolviendo la atención a la relación entre poder, clase y política. Además, la atención al poder confiere a la TRP un filón crítico para escapar de la habitual acepta-

ción acrítica de los conceptos y argumentos que justifican las políticas públicas, así como clarificar las posturas normativas subyacentes a ellos. Pero la reconstrucción de la TRP también ofrece un puente que salve la hiperespecialización académica y conecte el estudio del EB con otros campos de investigación: desde la economía política internacional hasta el estudio organizacional de partidos y sindicatos, pasando por el comportamiento político o la teoría del poder. La base de un posible intercambio entre todos ellos puede ser la pregunta inicial de uno de los fundadores de la TRP: «¿Cuán importantes son la clase y el poder para el conflicto y el cambio en la sociedades occidentales?»¹⁴ (Korpi, 1983: 4).

La TRP echó a andar en una época en la que la clase, el poder y la igualdad estaban en las agendas política y académica. El relativo declive de la TRP en los debates académicos guarda relación con la progresiva desaparición de estos temas desde los años noventa. Las ciencias sociales no son inmunes a la moda, y al seguir las corrientes corren el riesgo de construir castillos de arena sin continuidad en el tiempo, que impiden un progreso acumulativo (Geddes, 1991). El final de la *belle époque* neoliberal y el renovado interés por la desigualdad invitan a desempolvar el programa de investigación de la TRP, sobre todo a la vista de la incapacidad de los enfoques institucionalistas para dar cuenta de la evolución del EB tras la crisis. La claridad teórico-conceptual y la aplicabilidad empírico-metodológica de este programa de investigación facilitan esta tarea, e invitan a un diálogo con otros campos colindantes. En este sentido, la TRP debe concebirse como «un *work-in-progress*, no como un punto de llegada» (Korpi, 1998: xii).

¹³ Lo que equivaldría a pensar que «la ausencia de movimientos feministas fuertes y ruidosos en Arabia Saudí [implica] que en este país el género es irrelevante» (Korpi y Palme, 2003: 440).

¹⁴ A la clase habría que añadir, tres décadas y media después, el género.

BIBLIOGRAFÍA

- Abdelal, Rawi (2007). *Capital Rules: The Construction of Global Finance*. Cambridge: Harvard University Press.
- Anderson, Christopher J. y Beramendi, Pablo (2012). «Left Parties, Poor Voters, and Electoral Participation in Advanced Industrial Societies». *Comparative Political Studies*, 45(6): 714-746.
- Block, Fred (1977). «The Ruling Class Does not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State». *Socialist Revolution*, 33: 336-328.
- Bonoli, Giuliano (2006). «New Social Risks and the Politics of Post-industrial Social Policies». En: Armingeon, K. y Bonoli, G. (eds.). *The Politics of Post-industrial Welfare States*. London: Routledge.
- Clayton, Richard y Pontusson, Jonas (1998). «Welfare-State Retrenchment Revisited: Entitlement Cuts, Public Sector Restructuring, and Inegalitarian Trends in Advanced Capitalist Societies». *World Politics*, 51(1): 67-98.
- Emmenegger, Patrick; Häusermann, Silja; Palier, Bruno y Seeleib-Kaiser, Martin (2012). *The Age of Dualization. The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies*. Oxford: Oxford University Press.
- Esping-Andersen, Gøsta (1985). *Politics against Markets: The Social Democratic Road to Power*. Princeton: Princeton University Press.
- Esping-Andersen, Gøsta (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press.
- Esping-Andersen, Gøsta (2000). *Fundamentos sociales de las economías postindustriales*. Barcelona: Ariel.
- Estevez-Abe, Margarita; Iversen, Torben y Soskice, David (2001). «Social Protection and the Formation of Skills: A Reinterpretation of the Welfare State». En: Hall, P. y Soskice, D. (eds.). *Varieties of Capitalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Evans, Peter; Rueschemeyer, Dietrich y Skopold, Theda (1986). *Bringing the State back in*. New York: Cambridge University.
- Ferrera, Maurizio y Hemerijck, Anton (2003). «Recalibrating Europe's Welfare Regimes». En: Zeitlin, J. y Drubek, D. M. (eds.). *Governing Work and Welfare in the New Economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Fraser, Nancy (1989). *Unruly Practices*. Cambridge: Polity.
- Gallie, David (ed.) (2007). *Employment Regimes and the Quality of Work*. Oxford: Oxford University Press.
- Geddes, Barbara (1991). «Paradigms and Sand Castles in Comparative Politics». En: Crotty, W. (ed.). *Political Science, Looking to the Future*. Evanston: Northwestern University Press.
- Gingrich, Jane y Häusermann, Silja (2015). «The Decline of the Working-class Vote, the Reconfiguration of the Welfare Support Coalition and Consequences for the Welfare State». *Journal of European Social Policy*, 25(1): 50-75.
- Gowan, Peter (2000). *La apuesta por la globalización*. Madrid: Akal.
- Green-Pedersen, Christoffer y Haverland, Markus (2002). «The New Politics and Scholarship of the Welfare State». *Journal of European Social Policy*, 12(1): 43-61.
- Gustafsson, Siv (1994). «Childcare and Types of Welfare States». En: Sainsbury, D. (ed.). *Gendering Welfare States*. London: Sage.
- Hall, Peter A. y Taylor, Rosemary C. R. (1996). «Political Science and the Three New Institutionalisms». *Political Studies*, 44(5): 936-957.
- Häusermann, Silja; Picot, Georg y Geering, Dominik (2013). «Rethinking Party Politics and the Welfare State». *British Journal of Political Science*, 43(1): 221-240.
- Hernes, Helga M. (1987). *Welfare State and Woman Power*. Oslo: Norwegian University Press.
- Hirsch, Fred (1978). «The Ideological Underlay of Inflation». En: Hirsch, F. y Goldthorpe, J. H. (eds.). *The Political Economy of Inflation*. London: Martin Robertson.
- Hobson, Barbara y Lindholm, Marika (1997). «Collective Identities, Women's Power Resources, and the Making of Welfare States». *Theory and Society*, 26(4): 475-508.
- Huber, Evelyne y Stephens, John D. (2000). «Partisan Governance, Women's Employment, and the Social Democratic Service State». *American Sociological Review*, 65(3): 323-342.
- Huber, Evelyne y Stephens, John D. (2001). *Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Policies in Global Markets*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Immergut, Ellen M. (1990). «Institutions, Veto Points, and Policy Results: A Comparative Analysis of Health Care». *Journal of Public Policy*, 10(4): 391-416.
- Kangas, Olin (1991). *The Politics of Social Rights*. Stockholm: Stockholm University.
- Katz, Richard S. y Mair, Peter (1995). «Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party». *Party Politics*, 1(1): 5-28.
- Korpi, Walter (1978). *The Working Class in Welfare Capitalism: Work, Unions and Politics in Sweden*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Korpi, Walter (1983). *The Democratic Class Struggle*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Korpi, Walter (1989). «Power, Politics, and State Autonomy in the Development of Social Citizenship». *American Sociological Review*, 54(3): 309-328.
- Korpi, Walter (1991). «Political and Economic Explanations for Unemployment: A Cross-National and Long-Term Analysis». *British Journal of Political Science*, 21(3): 315-348.
- Korpi, Walter (1998). «The Iceberg of Power below the Surface». En: O'Connor, J. S. y Olsen, G. M. (eds.). *Power Resources Theory and the Welfare State, A Critical Approach*. Toronto: University of Toronto Press.
- Korpi, Walter (2000). «Faces of Inequality: Gender, Class, and Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare States». *Social Politics*, 7(2): 127-191.
- Korpi, Walter (2001). «Contentious Institutions: An Augmented Rational-Action Analysis of the Origins and Path Dependency of Welfare State Institutions in Western Countries». *Rationality and Society*, 13(2): 235-283.
- Korpi, Walter y Palme, Joakim (2003). «New Politics and Class Politics in the Context of Austerity and Globalization». *American Political Science Review*, 97(3): 425-446.
- Korpi, Walter y Shalev, Michael (1980). «Strikes, Power, and Politics in the Western Nations, 1900-1976». *Political Power and Social Theory*, 1: 301-334.
- Kristal, Tali (2010). «Good Times, Bad Times». *American Sociological Review*, 75(5): 729-763.
- Lakatos, Irme (1978). *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lewis, Jane (1992). «Gender and the Development of Welfare Regimes». *Journal of European Social Policy*, 2(3): 159-173.
- Lister, Ruth (1994). «“She Has Other Duties”: Women, Citizenship and Social Security». En: Baldwin, S. y Falkingham, J. (eds.). *Social Security and Social Change: New Challenges to the Beveridge Model*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Mahon, Rianne (2006). «The OECD and the Work/family Reconciliation Agenda: Competing Frames». En: Lewis, J. (ed.). *Children, Changing Families and Welfare States*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Mair, Peter (2013). *Ruling the Void*. London: Verso.
- Miliband, Ralph (1980). *El Estado en la sociedad capitalista*. México: Siglo XXI.
- Morgan, Kimberly J. (2013). «Path Shifting of the Welfare State: Electoral Competition and the Expansion of Work-Family Policies in Western Europe». *World Politics*, 65(1): 73-115.
- Moschonas, Gerassimos (2002). *In the Name of Social Democracy: The Great Transformation, 1945 to the Present*. London: Verso.
- Myles, John (1984). *Old Age in the Welfare State*. Princeton: Princeton University Press.
- Naumann, Ingela (2012). «Childcare Politics in the “New” Welfare State». En: Bonoli, G. y Natali, D. (eds.). *The Politics of the New Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.
- O'Connor, James (1973). *The Fiscal Crisis of the State*. New York: St. Martin's Press.
- O'Connor, Julia S. (1993). «Gender, Class and Citizenship in the Comparative Analysis of Welfare State Regimes: Theoretical and Methodological Issues». *British Journal of Sociology*, 44(3): 501-518.
- Offe, Claus (1974). «Structural Problems of the Capitalist State». En: Beyme, V. (ed.). *German Political Studies*. London: Sage.
- Offe, Claus (1984). *Contradictions of the Welfare State*. London: Hutchinson.
- Offe, Claus (1996). *Modernity and the State: East, West*. Cambridge: Polity Press.
- Orloff, Anne S. (1993). «Gender and the Social Rights of Citizenship». *American Sociological Review*, 58(3): 303-328.
- Orloff, Anne S. (2009). «Gendering the Comparative Analysis of Welfare States: An Unfinished Agenda». *Sociological Theory*, 27(3): 317-343.

- Palme, Joakim (1990). *Pension Rights in Welfare Capitalism*. Stockholm: Stockholm University.
- Pierson, Paul (1996). «The New Politics of the Welfare State». *World Politics*, 48(2): 29.
- Pierson, Paul (2000). «Three Worlds of Welfare State Research». *Comparative Political Studies*, 33(6-7): 791-821.
- Pierson, Paul (2001). *The New Politics of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.
- Polanyi, Karl (1989). *La gran transformación*. Madrid: La Piqueta.
- Pontusson, Jonas (1992). *The Limits of Social Democracy*. Ithaca: Cornell University Press.
- Poulantzas, Nicos (1979). *Estado, poder y socialismo*. Madrid: Siglo XXI.
- Poulantzas, Nicos (1982). *Political power and social classes*. London: Verso.
- Rodrik, Dani (2011). *The Globalization Paradox*. New York: W.W. Norton & Company.
- Rothstein, Bo (1998). *Just Institutions Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sainsbury, Diane (1994). *Gendering Welfare States*. London: Sage.
- Saraceno, Chiara (1997). «Family Change, Family Policies and the Restructuring of Welfare». En: OECD. *Family, Market and Community: Equity and Efficiency in Social Policy*.
- Scharpf, Fritz W. (1991). «Limitaciones económicas e institucionales a las estrategias de pleno empleo». En: Goldthorpe, J. H. (ed.). *Orden y conflicto en el capitalismo contemporáneo*. Madrid: MTSS.
- Schwartz, Herman (2001). «Round Up the Usual Suspects! Globalization, Domestic Politics, and Welfare State Change». En: Pierson, P. (ed.). *The New Politics of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.
- Siim, Birte (1988). «Towards a Feminist Rethinking of the Welfare State». En: Jones, K. B. y Jonasdotir, A. G. (eds.). *The Political Interests of Gender*. London: Sage.
- Skocpol, Theda (1995). *Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States*. Cambridge: Harvard University Press.
- Starke, Peter (2008). *Radical Welfare State Retrenchment. A Comparative Analysis*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Stephens, John D. (1979). *The Transition from Capitalism to Socialism*. London: Macmillan.
- Stephens, John D. (2010). «Social Rights of Citizenship». En: Castles, F. G.; Leibfried, S.; Lewis, J.; Obinger, H. y Pierson, C. (eds.). *The Oxford Handbook of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.
- Streeck, Wolfgang (2014). *Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism*. London: Verso.
- Svallfors, Stefan (2006). *The Moral Economy of Class: Class and Attitudes in Comparative Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Swenson, Peter (2002). *Capitalists against Markets*. Oxford: Oxford University Press.
- Therborn, Göran (1978). *What Does the Ruling Class Do when it Rules?* London: NLB.
- Titmuss, Richard M. (1981). *Política social*. Barcelona: Ariel.
- Wennemo, Irene (1992). «The Development of Family Policy». *Acta Sociologica*, 35(3): 201-217.
- Wennemo, Irene (1994). *Sharing the Costs of the Children*. Stockholm: Swedish Institute for Social Research.
- Wilensky, Harold L. (1975). *The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures*. Berkeley: University of California Press.

RECEPCIÓN: 30/01/2018

REVISIÓN: 02/08/2018

APROBACIÓN: 09/07/2019

Power Resources Theory: A Critical Reassessment

La teoría de los recursos de poder: una revisión crítica

Inés Campillo and Jorge Sola

Key words

Class

- De-commodification
- Welfare State
- Gender
- Power Resources

Palabras clave

Clase

- Desmercantilización
- Estado de bienestar
- Género
- Recursos de poder

Abstract

Power resources theory (PRT) has been one of the dominant approaches in the study of the development of post-war welfare states. Its central idea is that different class power balances produce different forms of welfare states. However, scholars have increasingly questioned its explanatory ability to account for recent transformations in post-industrial welfare states. This article analyses the origins and contents of the PRT, reviews three of the main critiques it has received and suggests a path for the reconstruction of its research programme, arguing that it is a good starting-point for assessing recent changes in the welfare state and for promoting a dialogue with other neighbouring fields of research.

Resumen

La teoría de los recursos de poder (TRP) fue uno de los enfoques dominantes en el estudio del desarrollo de los Estados de bienestar de posguerra. Su idea básica es que los diferentes equilibrios de poder de clase explican las diversas formas adoptadas por estos. No obstante, cada vez más autores cuestionan su capacidad explicativa para dar cuenta del devenir de los Estados de bienestar postindustriales. Este artículo analiza los orígenes y contenidos de la TRP, revisa algunas de las principales críticas que ha recibido y sugiere una vía para la reformulación de este programa de investigación, mostrando que es un buen punto de partida para abordar las transformaciones recientes del Estado de bienestar y establecer un diálogo con otras áreas de investigación colindantes.

Citation

Campillo, Inés and Sola, Jorge (2020). "Power Resources Theory: A Critical Reassessment". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 170: 19-34. (<http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.170.19>)

Inés Campillo: Universidad Complutense de Madrid | ines.campillo@ucm.es

Jorge Sola: Universidad Complutense de Madrid | jorgesola@cps.ucm.es

INTRODUCTION

The welfare state (WS in what follows) occupies a key place in contemporary western societies, although its form varies from country to country. Why is the WS more developed, its welfare policies more generous and universal, and its redistributive effects more egalitarian in certain countries? Such questions have occupied the attention of many scholars in the last four decades, forming a research agenda that has produced important advances in our knowledge of the origins and development of the WS.

Among the different perspectives analyzing variations in the WS, the most well-known is probably the *power resources theory* (PRT). This approach explains the development of the welfare state and its different forms as being the result of the balance of power among social classes. Whether because its contribution to the renewal of the study of the WS in the 1980s, or because it has been the subsequent target of attacks and debate, PRT occupies a central place even among its critics (Pierson, 2000).

In addition to the centrality of this approach in this flourishing field, there are two other reasons for examining PRT. The first is that it is a research programme that exemplifies how social theory and empirical research can go hand in hand, coherently combining the study of substantive issues with methodological rigour. The second is that its focus on the “iceberg of power below the surface [of public policies]” (Korpi, 1998) can be inspiring in a time of crisis and great inequality.

The aim of this article is to provide a critical review of PRT and the debates it has inspired, as well as to discuss its relevance for future research on the WS and for other related fields. The article is structured as follows. The key ideas behind PRT are presented in the first section. Then, in the three sections that follow, we address three critiques based, respectively, on its lack of attention to gender inequality, institutional dy-

namics and structural limits, and we examine how aspects of these critiques have been incorporated into PRT’s research programme¹. Lastly, we discuss the continued applicability of PRT and we suggest two paths for its reconstruction in future research.

POWER RESOURCES THEORY AS A RESEARCH PROGRAMME

PRT appeared in a specific political and theoretical context: at the end of the 1970s with a focus placed on the experience of Scandinavian social democracies. The theory’s foundational studies (Korpi, 1978, 1983; Stephens, 1979; Esping-Andersen, 1985) aimed to explain the differential success of Scandinavian WSs and explore the possibilities of democratic-parliamentary policy. This way they intervened in two parallel debates. On the *theoretical* level, PRT was a response to the two dominant visions of the state: pluralism and “orthodox” marxism. PRT rejected both the pluralist perspective that state power translated the pressures from a multiplicity of actors with similar influence, and the marxist perspective that it was a simple apparatus to protect capitalist interests. In contrast, the state and its policies were understood to be the crystallisation of the “democratic class struggle” (Korpi, 1983). In other words, the state was sensitive to the variable distribution of power between classes, essentially expressed by the strength of the workers’ movement. The political correlate was the emphasis on the possibilities for social change

¹ These are not the only critiques directed to PTR. With no attempt to be exhaustive, we can mention studies that emphasise, rather than class conflict, support from business elites (Swenson, 2002) and the centrality of investment in human capital (Estevez-Abe *et al.*, 2001) in the development of the welfare state, or the literature that focuses on partisan competition and growing electoral volatility (Anderson and Beramendi, 2012; Häusermann *et al.*, 2013). For reasons of space, this article focuses on these three groups of criticisms (which also constitute quite heterogeneous alternative approaches).

offered by political democracy under capitalism, illustrated by the advances achieved by the Scandinavian social democracy, which was ultimately presented as an experience of a “transition to socialism” (Stephens, 1979). This context is key, but the success of PRT was precisely based on preserving its explanatory performance despite expanding the geographical and temporal universe of its application.

On the explanatory level, in contrast to the dominant functionalist perspectives, PRT emphasised political factors. The former explained the development of the WS by its functional character in industrial societies, or in the reproduction of capitalism: for pluralist authors associated with the “logic of industrialism”, the WS was basically a response to “economic growth and its demographic and bureaucratic outcomes” (Wilensky 1975: xiii), independently of the political direction of governments; while for those authors linked to “structural marxism”, the WS developed to ensure the longterm stability and legitimacy of capitalism (O’Connor, 1973). Although a certain level of socioeconomic development was a necessary condition for the appearance of the different WSs, this does not explain the qualitative differences in their subsequent evolution.

The core of PRT can be summarised as follows: the distribution of power resources among class actors is the engine for the development of welfare states and explains their variations. In particular, the greater the power resources of the working class are, the more generous and egalitarian is the WS. The key lies not only in the importance of class conflict, but also in the recognition that the distribution of power among classes varies from one society to another, in contrast to many pluralist and marxist approaches that “assume that the distribution of power in Western societies has been relatively stable although they disagree on whether this distribution is relatively equal or grossly unequal” (Korpi, 1998: vii).

The innovation of PRT consisted not only in proposing a new explanation for the development of the WS, but also in reconceptualising this very phenomenon; not only offering an alternative *explanans*, but also revising the very *explanandum*. The *explanans* was the balance of “class power resources”, conceived as attributes that “provide the capacity to reward or to punish other actors” (Korpi, 1983: 15). While capitalists, due to their property and control over capital, have an enormous power in distributive conflicts, workers have only their labour power to negotiate in the labour market. The only way they have of increasing their power resources is through collective organisation by means of parties and unions².

Regarding political parties, the main variables proposed to operationalise power resources were percentage of votes, number of seats and government posts held by left-wing parties and, above all, years of left-wing governments. Comparative historical analysis also revealed the importance of historical legacies and alliances of working class parties with other social actors. Regarding right-wing parties, a distinction was soon established between liberals and Christian Democrats, for their different contributions to the construction of WSs.

Regarding labour unions, the main variables chosen were their organisational structure (degree of unity/fragmentation) and the level of union membership (Korpi, 1983). Strike activity was discarded as an indicator because it declined as the workers movements, thanks to the increase and institutionalisation of its power, was capable of shifting and broadening the distributive conflict from the employment sphere to the political arena (Korpi and Shalev, 1980). This “politicisation” of the distributive conflict benefited workers, as the political-democratic logic (“one per-

² Capitalists also have power through their capacity for collective action.

son, one vote”) was more favourable to them than the logic of the market, where capital had the upper hand. As a British Labour slogan said: *The rich man has his money, the poor man has his politics* (Hirsh, 1978: 269). The development of the WS can be seen as the product of “politics against the market” (Esping-Andersen, 1985).

In this sense, PRT also represented a dual turn with respect to the conceptualisation of the *explanandum*: the development of the WS. Earlier literature had basically addressed its quantitative dimension, expressed as the level of social spending as a percentage of the GDP (Wilensky, 1975), a choice fostered by the unavailability of other type of data. Supporters of PRT, in contrast, defended a qualitative perspective: what was important was not *how much* the WS spent, but rather *how* and with *what* effects, in other words, its coverage and redistributive impact when it comes to achieving greater equality and guaranteeing “social citizenship” to all the population³. As Huber and Stephens state: “The struggle over welfare states is a struggle over distribution, and thus the organizational power of those standing to benefit from redistribution, the working and lower middle classes, is crucial” (2001: 17).

In terms of measuring the impact of the WS, the most successful criterion was that of “de-commodification”, which refers to the degree to which “social rights... permit people to make their living standards independent of pure market forces...[and] strengthens the worker and weakens the absolute authority of the employer”⁴ (Esping-Andersen, 1990: 3-22). The study of WSs should

address the degree to which social policies counterbalance the distributive logic of the market and reequilibrate social relations in a manner favourable to the working class. Esping-Andersen operationalised de-commodification through the generosity of, and access to, various benefits (illness, unemployment and pensions), although the concept can be operationalised in other manners as well.

The second turn in the PRT consisted in broadening the focus of study to not only the state, but also welfare *regimes*: “qualitatively different arrangements between state, market, and the family” in the provision of welfare (Esping-Andersen, 1990: 26). Inspired by the work of Titmuss (1981), Esping-Andersen constructed his famous typology that distinguishes among welfare regimes in function of their degree of de-commodification: in ascending order, liberal or anglo-saxon regimes, conservative or corporatist regimes, and social democratic or Nordic regimes. Social policies in each one would be guided by different principles (lack of resources, employment status or citizenship) and would have different effects on stratification. This typology, which is broadly accepted today, would later be broadened to include other regimes, such as those of the Antipodes or southern Europe.

Along with the redistributive effects of the WS, PRT addresses its political-ideological impact. On the one hand, de-commodification attenuates labour market divisions and competition between workers, fostering their unity and organisation for collective action (Esping-Andersen, 1985). On the other hand, the social policies associated with the ideal of citizenship promote a “moral economy” of egalitarian norms and principles (Svallfors, 2006). In this sense, the medium term continuity of left-wing governments contributed to changing “the preferences of actors,... the universe of actors (and thereby the distribution of preferences) and/or ... the expectations of actors” (Huber and Ste-

³ To apply this theoretical approach to empirical research, Korpi and Esping-Andersen promoted the *Social Citizenship Indicator Program* (SCIP), and Lyle Scruggs, *The Comparative Welfare Entitlements Dataset* (CWED).

⁴ The term is inspired by the work of Polanyi (1989), and according to Offe (1996), it occurred to him in a conversation with Esping-Andersen.

phens, 2001: 28), shifting the limits of what was perceived as possible and desirable in political debate. Once applied, policies created an ideological/institutional setting that was more difficult to reverse and that could survive very different governments.

PRT inspired a large number of studies supporting its main thesis that the distribution of class power explains the development of the WS. Following in the path of the theory's founding studies, a focus on more specific social policies emerged, such as on pensions (Myles, 1984; Palme, 1990), health care (Kangas, 1991) and family support (Wennemo, 1994), as well as on aspects of the labour market, such as levels of unemployment (Korpi, 1991), quality of work (Gallicie, 2007) and the functional distribution of income (Kristal, 2010). PRT has become one of the most influential approaches in examining the development of the WS, but it has also been the object of much criticism. The ambitious book by Huber and Stephens (2001) —which combines statistical and historical-comparative analyses over a time span of half a century— is illustrative in this sense: its conclusion is that power resources were a decisive factor in the development of the post-war WS, but have ceased to be so in the last three decades; a finding that places the validity of the theory into question, something which we will examine later. However, before doing so, we will look at some of the criticisms that have been raised against it.

THE FEMINIST CRITIQUE: WOMEN'S POWER RESOURCES

The first group of criticisms came from feminism, which accused PRT of ignoring gender and being based on allegedly neutral categories (worker, citizenship and family) that, in reality, were based on masculine experience and rooted in the sexual division of labour. However, the centrality that PRT gives to power and stratification provided a

bridge for exchange with feminist researchers on the citizenship of women (Sainsbury, 1994). These scholars would reveal the underlying gender biases of the key categories of PRT (market, state, stratification and social citizenship), and would offer approaches to rectify them⁵, with a view to elaborating a theory on power and inequality under welfare regimes that would consider both men and women (Orloff, 1993; O'Connor, 1993).

First, feminist criticisms were aimed at the notion of “welfare regime”. Although this concept refers to the interaction among state, market and family in the provision of welfare, empirical attention using PRT had focused on the relationship between the first two institutions (expressed, for example, in classic income transfer programmes, such as pensions, sickness and unemployment) and had ignored the family. As a result, not only was the key role of the family (and women) in the provision of care ignored, but gender inequality within the family and the labour market was concealed. For this reason, feminist researchers indicated the need to examine how welfare regimes affected not only the position of workers in the market, but also that of women within the family —the degree to which they impacted the sexual division of labour within and outside the family— with the aim of better evaluating the kind of “citizenship” promoted by each regime.

This demanded addressing the familist ideology —or “politics of need interpretation” (Fraser, 1989)— that each regime put in place: in other words, addressing the extent to which the male breadwinner family model was maintained, and welfare related rights that were different for men and wom-

⁵ Other researchers would follow a different path and would formulate approaches independent from PRT that primarily focused on gender inequalities (Lewis, 1992; Sainsbury, 1994).

en (Lewis, 1992; Sainsbury, 1994). It also required broadening the concept of social stratification underlying PRT to incorporate gender inequality. The analysis of the stratifying effects of each regime should not be restricted to market dynamics and class divisions, but should also address family dynamics and gender divisions, as well as the interaction between these factors. The WS could attenuate gender inequality, but it could also reproduce it: this was the case, for example, among corporatist regimes. By linking social rights to employment status, much more precarious for women (who are more likely to be unemployed, have temporary jobs or work part-time), many women were prevented from accessing welfare programmes, reinforcing their economic dependency and weakening their citizenship.

The feminist critique was also aimed at the idea of de-commodification as the foundation for social citizenship. This notion assumes a prior “commodification”: in other words, a life experience that was specific to men, based on full-time labour market participation during the majority of adult life, and which represented the path to accessing many social rights. But this was not the experience of the majority of women, who lived (and, in part, continue living, although intermittently) outside of the labour market. In fact, the commodification of women could have an emancipatory aspect when we consider their subordination in the home. Given that de-commodification did not capture the complexity of women’s social citizenship, some authors proposed complementing it with two new dimensions that would capture the degree to which welfare regimes fostered women’s access to paid work, and the degree to which they fostered the capacity of those who provide care (in their majority, women) to form autonomous households (Orloff, 1993). These three dimensions would capture the degree to which each regime fostered personal autonomy, not only regarding the market or

employers, but also regarding the family and spouse or partner (O’Connor, 1993).

In addition, feminist reworking of PRT was also aimed at the *explanans*: to understand the character of the different welfare regimes, the power resources of women had to be added to those of class. Class organisations were not the only relevant ones for achieving a WS favourable to women (Hernes, 1987); on the contrary, it was necessary to examine the “power from below” (Siim, 1988) of other organisations, such as feminist movements and lobbies. These power resources of women were deployed in the discursive sphere and in political mobilisation through alliances between the feminist movement and left-wing parties (Orloff, 1993). In fact, various empirical studies have shown that the level of protection for women workers and single mothers (Hobson and Lindholm, 1997), and the level of monetary assistance to families (Wennemo, 1992) and childcare services (Gustafsson, 1994; Mahon, 2006; Naumann, 2012) depend largely on the strength and strategy of the feminist movement in alliance with left-wing parties⁶.

These feminist critiques were to a great extent accepted by defenders of PRT. The case of Esping-Andersen (2000) stands out, as he was the target of the majority of feminist criticisms⁷: in addition to emphasising the importance of the family economy, he addressed a common error committed at present consisting in designing public policies for a traditional family model that is in decline. Likewise, he introduced, along with the proposals mentioned, a complementary criterion for analysing welfare regimes: “de-

⁶ The majority of these studies have focused on the post-war period up until the 1990s, largely ignoring the following period, probably because of the subsequent predominance of institutionalism.

⁷ Ironically, this focus on gender and the family would be accompanied by his gradual distancing from PRT.

familiarisation”⁸, which referred to “policies that lessen individuals’ reliance on the family; that maximize individuals’ command of economic resources independently of familial or conjugal reciprocities” (2000: 66). Analysis of public spending on services for families, or the coverage of public services for childcare and homecare for the elderly, showed that social democratic welfare regimes stood out in comparison to liberal and corporatist regimes, which were much less de-familiarised (although in the liberal regimes these services fall more on the market, and in corporatist regimes, on the family).

Korpi (2000) also did not shy away from criticisms and has since concentrated on stratification, studying how different WSs foster class as well as gender equality or inequality, understood not only in material terms but also in terms of agency. Thus, through the analysis of different policies (social security programmes, fiscal policies and social services), he distinguishes three welfare state models based on the family model they support: traditional, dual earner/caregiver family, and market oriented family. Huber and Stephens (2000), for their part, emphasised the importance of public services (with quality employment) to activate a virtuous circle that facilitates women’s access to employment and increases their political power; labour market participation, women’s organisations and their influence on political parties become, in turn, key factors in the development of the WS.

In short, PRT has undergone an (unfinished (Orloff, 2009)) “gendering” process that has broadened its thematic interests and lines of research. The basic proposition that is at the core of the feminist reformulation of this research programme is: the greater the power resources of women, the greater the

personal autonomy welfare regimes will provide them (and vice versa).

INSTITUTIONALIST CRITIQUE: HISTORICAL INERTIAS

PRT’s hegemony was undermined in the 1990s by institutionalism. This label groups together different approaches that share a common assumption: state institutions matter⁹. According to Theda Skocpol, the main exponent of the theoretical task of “bringing the state back in” (Evans *et al.*, 1986), PRT conceived politics as “socially deterministic” and “that governmental activities express social conditions and straightforwardly respond to social demands” (Skocpol, 1995: 40). Against this determinism, she proposes “a polity-centered analysis”, the central argument being that historically constituted government institutions, established public policies, state-bureaucratic personnel and the political-electoral system are not a mere setting of conflict or an instrument in the hands of opposing social groups, but constitute forces that are relatively independent from class conflict.

Although this basic idea has been developed in different lines of analysis¹⁰, the dominant theoretical perspective until very recently has been the so-called “new politics” of the WS (Ferrera and Hemerijck, 2003; Pierson, 2001, 1996; Bonoli, 2006; Green-Pedersen and Haverland, 2002). According to this approach, PRT and its assumptions based on “old politics” are valid for accounting for

⁸ A term taken from Lister (1994) and Saraceno (1997), which has, according to Orloff (2009), lost some of its critical edge.

⁹ New institutionalism is somewhat broader: of the three types (historical, rational choice and sociological institutionalism) that Hall and Taylor (1996) distinguish, we are basically referring to the first. However, we do not analyse certain classic studies, such as Rothstein (1998), which can also be categorised as “institutionalist”.

¹⁰ Analyses have focused, on the one hand, on political institutions, which establish the rules of the game; on the other, on institutions of the WS, which assure the provision of welfare (Starke, 2008).

the post-war expansion of the WS, but not for explaining the changing dynamics of the post-industrial WS. The key to this obsolescence would be the influence that pre-existing institutional arrangements have on political conflict and the continuity of welfare programmes: in other words, the *policy feedback* effects that already consolidated WS activate.

This argument has developed in two basic directions. First, the very institutional consolidation and would have legitimacy of the post-war welfare states would have profoundly altered political dynamics. While the key conflicts of the “old politics” mainly revolved around the expansion of rights and the increase of social spending, the new politics has to confront a context of “permanent austerity” and grapple with cutbacks in welfare programmes. In addition, while the old politics was dominated by the class conflict between a “pro-welfarist” left and an “anti-welfarist” right, the consolidation of welfare programmes would have forged new coalitions of beneficiaries in their support, which would go beyond traditional class organisations. As a result, defense of the WS would no longer be only led by left-wing parties and labour unions, but would also include new actors, born under the shelter of consolidated programmes — both beneficiaries and public employees — and voters of all stripes. Given the great popularity of the WS, all political parties have electoral incentives to introduce partial reforms instead of attempts to dismantle it, in such a way that political dynamics are more consensual and gradual than in the past.

Secondly, there has been an insistence on the importance of institutional inertias, particularly in terms of dependence on historical trajectories (path dependence). The basic argument is that, once created, WS programmes become a central part of the institutions and logics of the state, they become the *status quo*, which renders them more difficult to be reversed than to be preserved. This dynamic

is reinforced by the existence of political-constitutional “veto points” (Immergut, 1990). For this reason, institutionalists have emphasised the continuity of the WS and discarded the possibility of major changes, although they recognise that a process of restructuring of the WS is underway — in three directions: re-commodification, cost containment and “re-calibration” — to adapt them to the new context of “permanent austerity” (Pierson, 2001).

In reality, the classic formulation of PRT did not ignore the importance of institutional legacies, and its defenders have been receptive to institutionalist contributions¹¹. Their response has introduced three important nuances, regarding the *explanandum* (the evolution of the WS), the degree to which institutions are determining factors and the way in which power is integrated into their study.

First, the predominant image of the relative stability of the WS tends to fall into the old error of taking the level of social spending as a percentage of GDP as the dependent variable (Korpi and Palme, 2003). To this foundational criticism by PRT, must be added that although this indicator has barely altered in recent decades, the social reality upon which WS policies act has indeed changed: since the 1980s, the spectacular increase in unemployment, changes in the family model and the ageing of the population mean that the same level of spending cannot satisfy social needs in the same way, nor can it maintain prior levels of equality; as a result, the well-being achieved with this level of spending is notably less (see Clayton and Pontusson, 1998). Secondly, Huber and Stephens (2001) have explicitly incorporated a weak version of institutional inertias and legacies, broadening the focus by taking into account four causal mechanisms that favour continu-

¹¹ Some, such as Esping-Andersen, even accept the idea that “[E]xisting welfare states tend to be captive in their own institutional logic” (2000: 12) and have to a certain extent abandoned PRT.

ity: the ratchet effect, structural limitation, regime legacies and ideological hegemony; but they reject a strong version according to which key milestones in the development of a WS determine its future trajectory. Third, this catalogue of causal mechanisms point to a factor that Korpi (2001, 1989) has theorised more systematically: institutions are not settings or instruments independent of power conflicts between social groups, rather, they are the result of past conflicts and contribute to structuring future conflicts, so that they are intersected by the divisions of power privileged by PRT. The productive dialogue opened up between both approaches can also be enriched by the critique from a third approach: marxism.

THE MARXIST CRITIQUE: STRUCTURAL LIMITS

The third group of critiques accuses PRT of magnifying the explanatory power of democratic politics and minimising structural limitations. If PRT emerged in response to functional-structuralist perspectives on the WS, it runs the risk of making the opposite error, that of ignoring the structural limits that constrain its development. First, PRT should take into account that in a market economy “control over the choices of economic policies... does not ensure control over economic outcomes” (Scharpf, 1991: 361), which depend in great measure on economic dynamics. However, the critique ultimately rests on two more sophisticated arguments, that the state is subject to *class biases* and that it has a *structural dependency* on capital.

Regarding the first, various marxist authors have argued that the state must not be conceived as a neutral setting in class conflict, as it possesses specific structural characteristics that systematically favour the reproduction of capitalism (Poulantzas, 1982). Despite the functional touch of this idea, the debate that took place in the 1970s (Miliband,

1980; Offe, 1974; Therborn, 1978) suggested diverse explanatory mechanisms —from recruitment of and social interactions among state civil servants to the inertia of administrative logics— that questioned the optimism of PRT. However, these issues were forgotten with the academic decline of marxism and PRT did not established a dialogue with them. A possible development in this direction could have analysed the historical-geographic variability of these class biases and the interaction between state constraints and class actors (in other words, up to what point parties and labour unions could reduce them or see themselves trapped by them), which would also link up well with institutionalist debates.

The second path of marxist criticism looks at the “structural dependency” of the state in its relationship to capital: independent of what political force is in government and what the dominant class does, state administrators (politicians and civil servants) are structurally interested in maintaining a good “business climate” that favours business investment and achieves economic growth, which ultimately ensures the economic viability and political legitimacy of the state (Block, 1977). As a result, state policies move within certain limits that foster investment; if not, they run the risk of capital flight and consequent crisis. Of course, within these limits there are margins for variation, essentially determined by the pressure of class conflict. That is, the state must weight three conflicting demands: promoting investment, pursuing its own interests and satisfying social demands. All these contributions pointed, in one way or another, to the frictions that can be observed between the development of the WS and the pressures of capitalism, so well summed up by Offe: “while capitalism cannot coexist *with*, neither can it coexist *without*, the welfare state” (1984: 153).

PRT has been more receptive to the second criticism. Huber and Stephens admit that “capitalist interests have a systematic

advantage... aggravated by globalization” (2001: 13). However, state dependency on capital can be more pressing in regard to certain policies (fiscal pressures) than others (social policy), and ultimately, it is a question of degree, the study of which faces a methodological obstacle: it is difficult to establish where the structural limits are situated and to know if a policy conflicts with them. Offe (1974) argued that these limits can only be discovered empirically when social conflict openly challenges them, but even then they may not necessarily be clear (see, for example, the causes for the defeat of the Meidner plan in Sweden in Pontusson, 1992).

In any case, that structural limits (or pressures) exist does not eliminate policy variations, as shown by the case of globalisation. As Clayton and Pontusson indicate, “the question of whether capital mobility exerts downward pressure on welfare states should not be conflated with the question of whether capital mobility produces convergence among welfare states” (1998: 71). In other words: “the absence of convergence does not demonstrate an absence of effect [of globalisation]” (Schwartz, 2001: 23). Thus, to sum up, although structural limits are important in the development of the WS, they do not completely eliminate the variability PRT seeks to explain; however, its research programme would suffer if it lost sight of them, above all in the current context of crisis (see, for example, Streeck, 2014).

A PROGRESSIVE RECONSTRUCTION OF PRT?

Although the theoretical developments of PRT have widened the phenomena that it can explain (variations in WSs in terms of gender) and the complexity of its explanations (integrating institutional and structural factors), this has not always been accompanied by empirical results: for many authors, its explanatory performance has been re-

duced until almost disappearing in terms of being able to account for the evolution of the WS since the 1980s. Huber and Stephens themselves, seem to accept this conclusion, which to a great extent predominates in recent literature. Among the theory’s initial proponents, only Korpi has remained firm in his defense.

Should we reject PRT for this reason (or confine it to explaining the past)? In our opinion, doing so would be hasty and harmful. To explain why, it may be useful to refer to the ideas of Lakatos (1978) on the advance of scientific knowledge. According to this Hungarian philosopher, science does not work by dismissing a theory as soon as evidence contrary to it appears, but rather by trying to accommodate emerging anomalies within a broader programme of research. A research programme consists of a theoretical “core” and a “protective belt” of “auxiliary hypotheses” that surround it. When anomalies appear that do not fit within it, there is scope for modifying certain parts of this belt with the aim of preserving the theoretical core. The success of a research programme depends on its reconstruction being “progressive” and offering a “positive heuristics”: in other words, on its being capable of explaining new phenomena, rather than avoiding contrary evidence with patches that lead to a dead end.

PRT can be understood as a research programme: it contains a theoretical core (that the development of the WS is explained by the political articulation of class and gender divisions) and a protective belt of auxiliary theories that specify, among other things, how this political articulation is produced (for example, partially shifting distributive conflict, through labour unions and parties, from the market to the political arena of the nation-state). To discard PRT based on the valid criticisms made of the theory would be hasty and harmful because we do not have a better research programme available to account for the development and crisis of the WS. The

majority of institutionalist alternatives seem to be partial or *ad hoc* explanations, that accurately identify certain relevant factors but are not capable of integrating them in a coherent research programme. PRT, in contrast, possesses a healthy theoretical ambition: it is based on the “iceberg of power” that describes the social structure and connects with other research traditions (marxist, feminist and weberian) and key substantive problems (the relationships between power, class/gender and politics) in social sciences.

This theoretical ambition has been used empirically in a fruitful way: TRP stands out for its methodological effort to specify and empirically test its hypotheses; which it does by means of historical-comparative study and statistical analysis. As we have shown, the dialogue it has established with its critics has been helpful: PRT has been reformulated to address gender, has incorporated a “vertical” perspective on institutions and has integrated a focus on structural limits. But the acknowledgment by some of its adherents that it is incapable of explaining the evolution of the WS since the 1980s demands a deep rethinking. How can a “progressive reconstruction” of PRT be carried out?

In our opinion, this reconstruction could be developed in two directions —*upward* and *downward*— that, conserving the core of PRT, modify some of its auxiliary hypotheses. The underlying idea is that power (im) balances based on class and gender divisions continue being central in explaining social and employment policies, but their political articulation has undergone enormous changes in terms of the spheres in which distributive conflict takes place and the organisational weapons available to the popular classes.

First, PRT should look “upward”: processes of financialisation and globalisation should not be understood as simple exogenous factors that reduce the margin of manoeuvre of political actors, but as processes

resulting from strategies and conflicts that structure the “democratic class struggle” in an unequal manner in terms of the interests of different social groups (Gowan, 2000; Abdelal, 2007). That is, PRT should include in its research programme the systematic study of these processes and their effects: to analyse in what way power resources have been mobilised on a supranational level and the results this has produced. In a certain way, these two processes raise doubts about the above-mentioned achievement of a shift of the distributive conflict from the market to the political sphere (the nation-state), and distributive conflict from the market to the political sphere (the nation-state), and represent the opposite process: a return to the market. Globalisation has facilitated capital mobility and, therefore, has increased the “structural dependency” of a increasingly disarmed nation-state. The result is the famous *trilemma* of Rodrick (2011) between national sovereignty, globalisation and democracy (and the essential impossibility of reconciling the latter two). Financialisation has not only increased the weight of finance in the economy, but has shifted distributive conflict to a particularly opaque sphere that is resistant to the collective action of popular classes. Along with these two processes, we must also point out the impact of the construction of the European Union, whose evolution in recent decades reflects the hayekian ideal of a market protected from democratic pressures coming from the nation-state (Streeck, 2014). Much of the literature on the WS has assumed “permanent austerity” as the background in which public policies move. PRT provides a key for opening the “black box” of these three phenomena (as expressions of balances of power) and connecting them with the evolution of welfare and employment regimes.

Secondly, PRT must look “below”: the evolution of political parties (in particular, social democratic parties) raises the question of whether they continue to be power

resources in the hands of the working class. The rise of the “cartel party” model (Katz and Mair, 1995) implies a convergence of these organisations, as a result of their collusion with the state and in detriment to the connections that anchored them to society (Mair, 2013). The weakening of the organic ties between party and society is particularly important in the case of “class parties”: along with the shift of their electoral support toward the middle class (Gingrich and Häusermann, 2015), a decline in their militant base, a change in the social composition of their cadres and leaders, and their distancing from trade unions (Moschonas, 2002) seem to have contributed to cutting those ties, with the consequent effects on the policies that they defend and apply. Despite some supporters of PRT having emphasised that “there need to be organizations that articulate class interests... [and] political parties perform [that] crucial mediating role” (Huber and Stephens, 2001: 17-18), there is a gap in the study of these organisations in PRT —which seems to take the class-party link for granted. However, PRT offers tools for opening this “black box” and studying in what way and to what extent left-wing parties continue to represent the interests of the working class¹², in connection with recent debates over the WS, the decline in class voting in partisan politics (Häusermann *et al.*, 2013) and social dualisation.

The systematic consideration of these *upward* and *downward* processes seems a promising route for taking advantage of the core of PRT with a view toward explaining the current transformations of the WS, and, in general, of welfare and employment regimes. The key idea is that power (im)balanc-

es based on class (and gender) continue being central, but that their articulation differs substantially from that which existed in the so-called “golden age of capitalism”. This does not mean that the importance of class has disappeared¹³, but rather the opposite: the organisational dearticulation of popular classes and the supranational rearticulation of capitalist classes become key factors in explaining the recent evolution of the WS.

CONCLUSIONS

This article offers a critical review of PRT after presenting its research programme and reviewing three specific critiques (feminist, institutionalist and marxist), we have suggested a dual path for a future progressive reconstruction of this research programme based on the reformulation of power resources in two directions: supranational rearticulation (processes of globalisation and financialisation) and organisational dearticulation of class conflict (the mutation of political parties). This proposal is aimed at conserving the heuristic capacity of PRT in accounting for the recent evolution of welfare and employment regimes, and seems promising in two ways.

In regard to the general study of the WS, it continues to offer a good theoretical starting-point and permits researchers to avoid the danger of “abstract empiricism” (that is, the analysis of data and descriptions of phenomena without a theoretical framework that gives them meaning and value). In fact, reformulated as we suggest, PRT seems more capable than rival theories of accounting for the evolution of the WS during the so-called Great Recession, renewing attention on the relationships between power, class and poli-

¹² Based on what we have previously discussed, studying this “black box” must also include consideration of gender, and could benefit from the path opened up by feminist scholars in analysing the influence of women in political organisations (see, for example, Morgan, 2013).

¹³ “Just as the absence of strong and vocal feminist movements in countries such as Saudi Arabia need not imply that in this country gender is irrelevant” (Korpi and Palme, 2003: 440).

tics. In addition, its focus on power lends a critical punch to PRT, that permits it to avoid the usual uncritical acceptance of the concepts and arguments behind the public policies, as well as to clarify their underlying normative positions. But the reconstruction of PRT also offers a way of avoiding academic hyperspecialisation, connecting the study of the WS with other fields of research: from international political economy to the organisational study of parties and labour unions, as well as political behaviour and theories of power. The basis for a possible exchange among all these fields may be found in the initial question posed by one of PRT's founders: "How important are class and power for conflict and change in Western societies?"¹⁴ (Korpi, 1983: 4).

PRT appeared at a time in which class, power and equality were on political and academic agendas. The relative decline of the PRT in academic debates is related to the gradual disappearance of these issues since the 1990s. Social sciences are not immune to fashion, and in following it, they run the risk of building sand castles that lack continuity over time, which is an obstacle to accumulative progress (Geddes, 1991). The end of the neoliberal *belle époque* and a renewed interest in inequality invite us to dust off the research programme of PRT, above all considering the inability of institutionalist approaches to account for the evolution of the WS after the crisis. The theoretical-conceptual clarity and empirical-methodological applicability of this research programme facilitates this task, and invite us to engage in a dialogue with neighbouring fields. In this sense, PRT should be understood as "a work-in-progress, not an arrival" (Korpi, 1998: xii).

¹⁴ Along with class, one should add, three and a half decades later, gender.

BIBLIOGRAPHY

- Abdelal, Rawi (2007). *Capital Rules: The Construction of Global Finance*. Cambridge: Harvard University Press.
- Anderson, Christopher J. and Beramendi, Pablo (2012). "Left Parties, Poor Voters, and Electoral Participation in Advanced Industrial Societies". *Comparative Political Studies*, 45(6): 714-746.
- Block, Fred (1977). "The Ruling Class Does not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State". *Socialist Revolution*, 33: 336-328.
- Bonoli, Giuliano (2006). "New Social Risks and the Politics of Post-industrial Social Policies". In: Armingeon, K. and Bonoli, G. (eds.). *The Politics of Post-industrial Welfare States*. London: Routledge..
- Clayton, Richard and Pontusson, Jonas (1998). "Welfare-State Retrenchment Revisited: Entitlement Cuts, Public Sector Restructuring, and Inegalitarian Trends in Advanced Capitalist Societies". *World Politics*, 51(1): 67-98.
- Emmenegger, Patrick; Häusermann, Silja; Palier, Bruno and Seeleib-Kaiser, Martin (2012). The Age of Dualization. *The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies*. Oxford: Oxford University Press.
- Esping-Andersen, Gøsta (1985). *Politics against Markets: The Social Democratic Road to Power*. Princeton: Princeton University Press.
- Esping-Andersen, Gøsta (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press.
- Esping-Andersen, Gøsta (2000). *Fundamentos sociales de las economías postindustriales*. Barcelona: Ariel.
- Estevez-Abe, Margarita; Iversen, Torben and Soskice, David (2001). "Social Protection and the Formation of Skills: A Reinterpretation of the Welfare State". In: Hall, P. and Soskice, D. (eds.). *Varieties of Capitalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Evans, Peter; Rueschemeyer, Dietrich and Skopol, Theda (1986). *Bringing the State back in*. New York: Cambridge University.
- Ferrera, Maurizio and Hemerijck, Anton (2003). "Recalibrating Europe's Welfare Regimes". In: Zeitlin, J. and Drubek, D. M. (eds.). *Governing Work and Welfare in the New Economy*. Oxford: Oxford University Press.

- Fraser, Nancy (1989). *Unruly Practices*. Cambridge: Polity.
- Gallie, David (ed.) (2007). *Employment Regimes and the Quality of Work*. Oxford: Oxford University Press.
- Geddes, Barbara (1991). "Paradigms and Sand Castles in Comparative Politics". In: Crotty, W. (ed.). *Political Science, Looking to the Future*. Evanston: Northwestern University Press.
- Gingrich, Jane and Häusermann, Silja (2015). "The Decline of the Working-class Vote, the Reconfiguration of the Welfare Support Coalition and Consequences for the Welfare State". *Journal of European Social Policy*, 25(1): 50-75.
- Gowan, Peter (2000). *La apuesta por la globalización*. Madrid: Akal.
- Green-Pedersen, Christoffer and Haverland, Markus (2002). "The New Politics and Scholarship of the Welfare State". *Journal of European Social Policy*, 12(1): 43-51.
- Gustafsson, Siv (1994). "Childcare and Types of Welfare States". In: Sainsbury, D. (ed.). *Gendering Welfare States*. London: Sage.
- Hall, Peter A. and Taylor, Rosemary C. R. (1996). "Political Science and the Three New Institutionalisms". *Political Studies*, 44(5): 936-957.
- Häusermann, Silja; Picot, Georg and Geering, Dominik (2013). "Rethinking Party Politics and the Welfare State". *British Journal of Political Science*, 43(1): 221-240.
- Hernes, Helga M. (1987). *Welfare State and Woman Power*. Oslo: Norwegian University Press.
- Hirsch, Fred (1978). "The Ideological Underlay of Inflation". In: Hirsch, F. and Goldthorpe, J. H. (eds.). *The Political Economy of Inflation*. London: Martin Robertson.
- Hobson, Barbara and Lindholm, Marika (1997). "Collective Identities, Women's Power Resources, and the Making of Welfare States". *Theory and Society*, 26(4): 475-508.
- Huber, Evelyne and Stephens, John D. (2000). "Partisan Governance, Women's Employment, and the Social Democratic Service State". *American Sociological Review*, 65(3): 323-342.
- Huber, Evelyne and Stephens, John D. (2001). *Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Policies in Global Markets*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Immergut, Ellen M. (1990). "Institutions, Veto Points, and Policy Results: A Comparative Analysis of Health Care". *Journal of Public Policy*, 10(4): 391-416.
- Kangas, Olin (1991). *The Politics of Social Rights*. Stockholm: Stockholm University.
- Katz, Richard S. and Mair, Peter (1995). "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party". *Party Politics*, 1(1): 5-28.
- Korpi, Walter (1978). *The Working Class in Welfare Capitalism: Work, Unions and Politics in Sweden*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Korpi, Walter (1983). *The Democratic Class Struggle*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Korpi, Walter (1989). "Power, Politics, and State Autonomy in the Development of Social Citizenship". *American Sociological Review*, 54(3): 309-328.
- Korpi, Walter (1991). "Political and Economic Explanations for Unemployment: A Cross-National and Long-Term Analysis". *British Journal of Political Science*, 21(3): 315-348.
- Korpi, Walter (1998). "The Iceberg of Power below the Surface". In: O'Connor, J. S. and Olsen, G. M. (eds.). *Power Resources Theory and the Welfare State, A Critical Approach*. Toronto: University of Toronto Press.
- Korpi, Walter (2000). "Faces of Inequality: Gender, Class, and Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare States". *Social Politics*, 7(2): 127-191.
- Korpi, Walter (2001). "Contentious Institutions: An Augmented Rational-Action Analysis of the Origins and Path Dependency of Welfare State Institutions in Western Countries". *Rationality and Society*, 13(2): 235-283.
- Korpi, Walter and Palme, Joakim (2003). "New Politics and Class Politics in the Context of Austerity and Globalization". *American Political Science Review*, 97(3): 425-446.
- Korpi, Walter and Shalev, Michael (1980). "Strikes, Power, and Politics in the Western Nations, 1900-1976". *Political Power and Social Theory*, 1: 301-334.
- Kristal, Tali (2010). "Good Times, Bad Times". *American Sociological Review*, 75(5): 729-763.
- Lakatos, Irme (1978). *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Lewis, Jane (1992). "Gender and the Development of Welfare Regimes". *Journal of European Social Policy*, 2(3): 159-173.
- Lister, Ruth (1994). "'She Has Other Duties': Women, Citizenship and Social Security". In: Baldwin, S. and Falkingham, J. (eds.). *Social Security and Social Change: New Challenges to the Beveridge Model*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Mahon, Rianne (2006). "The OECD and the Work/family Reconciliation Agenda: Competing Frames". In: Lewis, J. (ed.). *Children, Changing Families and Welfare States*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Mair, Peter (2013). *Ruling the Void*. London: Verso.
- Miliband, Ralph (1980). *El Estado en la sociedad capitalista*. México: Siglo XXI.
- Morgan, Kimberly J. (2013). "Path Shifting of the Welfare State: Electoral Competition and the Expansion of Work-Family Policies in Western Europe". *World Politics*, 65(1): 73-115.
- Moschonas, Gerassimos (2002). *In the Name of Social Democracy: The Great Transformation, 1945 to the Present*. London: Verso.
- Myles, John (1984). *Old Age in the Welfare State*. Princeton: Princeton University Press.
- Naumann, Ingela (2012). "Childcare Politics in the 'New' Welfare State". In: Bonoli, G. and Natali, D. (eds.). *The Politics of the New Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.
- O'Connor, James (1973). *The Fiscal Crisis of the State*. New York: St. Martin's Press.
- O'Connor, Julia S. (1993). "Gender, Class and Citizenship in the Comparative Analysis of Welfare State Regimes: Theoretical and Methodological Issues". *British Journal of Sociology*, 44(3): 501-518.
- Offe, Claus (1974). "Structural Problems of the Capitalist State". In: Beyme, V. (ed.). *German Political Studies*. London: Sage.
- Offe, Claus (1984). *Contradictions of the Welfare State*. London: Hutchinson.
- Offe, Claus (1996). *Modernity and the State: East, West*. Cambridge: Polity Press.
- Orloff, Anne S. (1993). "Gender and the Social Rights of Citizenship". *American Sociological Review*, 58(3): 303-328.
- Orloff, Anne S. (2009). "Gendering the Comparative Analysis of Welfare States: An Unfinished Agenda". *Sociological Theory*, 27(3): 317-343.
- Palme, Joakim (1990). *Pension Rights in Welfare Capitalism*. Stockholm: Stockholm University.
- Pierson, Paul (1996). "The New Politics of the Welfare State". *World Politics*, 48(2): 29.
- Pierson, Paul (2000). "Three Worlds of Welfare State Research". *Comparative Political Studies*, 33(6-7): 791-821.
- Pierson, Paul (2001). *The New Politics of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.
- Polanyi, Karl (1989). *La gran transformación*. Madrid: La Piqueta.
- Pontusson, Jonas (1992). *The Limits of Social Democracy*. Ithaca: Cornell University Press.
- Poulantzas, Nicos (1979). *Estado, poder y socialismo*. Madrid: Siglo XXI.
- Poulantzas, Nicos (1982). *Political power and social classes*. London: Verso.
- Rodrik, Dani (2011). *The Globalization Paradox*. New York: W.W. Norton & Company.
- Rothstein, Bo (1998). *Just Institutions Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sainsbury, Diane (1994). *Gendering Welfare States*. London: Sage.
- Saraceno, Chiara (1997). "Family Change, Family Policies and the Restructuring of Welfare". In: OECD. *Family, Market and Community: Equity and Efficiency in Social Policy*.
- Scharpf, Fritz W. (1991). "Limitaciones económicas e institucionales a las estrategias de pleno empleo". In: Goldthorpe, J. H. (ed.). *Orden y conflicto en el capitalismo contemporáneo*. Madrid: MTSS.
- Schwartz, Herman (2001). "Round Up the Usual Suspects! Globalization, Domestic Politics, and Welfare State Change". In: Pierson, P. (ed.). *The New Politics of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.
- Siim, Birte (1988). "Towards a Feminist Rethinking of the Welfare State". In: Jones, K. B. and Jonasdotir, A. G. (eds.). *The Political Interests of Gender*. London: Sage.
- Skocpol, Theda (1995). *Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States*. Cambridge: Harvard University Press.
- Starke, Peter (2008). *Radical Welfare State Retrenchment. A Comparative Analysis*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

- Stephens, John D. (1979). *The Transition from Capitalism to Socialism*. London: Macmillan.
- Stephens, John D. (2010). "Social Rights of Citizenship". In: Castles, F. G.; Leibfried, S.; Lewis, J.; Obinger, H. and Pierson, C. (eds.). *The Oxford Handbook of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.
- Streeck, Wolfgang (2014). *Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism*. London: Verso.
- Svallfors, Stefan (2006). *The Moral Economy of Class: Class and Attitudes in Comparative Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Swenson, Peter (2002). *Capitalists against Markets*. Oxford: Oxford University Press.
- Therborn, Göran (1978). *What Does the Ruling Class Do when it Rules?* London: NLB.
- Titmuss, Richard M. (1981). *Política social*. Barcelona: Ariel.
- Wennemo, Irene (1992). "The Development of Family Policy". *Acta Sociologica*, 35(3): 201-217.
- Wennemo, Irene (1994). *Sharing the Costs of the Children*. Stockholm: Swedish Institute for Social Research.
- Wilensky, Harold L. (1975). *The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures*. Berkeley: University of California Press.

RECEPTION: January 30, 2018

REVIEW: August 2, 2018

ACCEPTANCE: July 9, 2019